

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas



LIMITACIONES DEL AUDITOR FRENTE A LA LEY DE BLANQUEO

Curso académico: 2019 -2020

Trabajo Fin de Máster

Presentado por:

D./Dña.

Endika Amezaga Etxebarria

Dirigido por:

Dr./Dra.

ALFONSO GARCIA- MONCÓ

Alcalá de Henares, a 6 de Julio de 2020

Contenido

| | |
|--|----|
| INTRODUCCION | 3 |
| MARCO NORMATIVO..... | 7 |
| Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo..... | 7 |
| Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas | 8 |
| ESTADO DE LA CUESTION..... | 11 |
| Introducción | 11 |
| Precisiones terminológicas..... | 12 |
| Evolución normativa | 15 |
| Introducción al problema | 18 |
| Limitaciones en el trabajo de auditoría | 20 |
| Responsabilidad del auditor | 33 |
| Caso Real | 36 |
| DISCUSION Y ANALISIS | 40 |
| CONCLUSIONES | 48 |
| Bibliografía | 50 |

INTRODUCCION

En las próximas páginas, el lector encontrará un trabajo de investigación, en el que se analiza la actual situación de los auditores en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales. El trabajo, está centrado en las limitaciones que un auditor puede encontrar en la realización de su tarea, es decir, las dificultades que tiene para detectar blanqueo de capitales en el análisis de las cuentas anuales de una empresa. De esta forma, analizaremos cuales son las herramientas que la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, provee al auditor para llevar a cabo su tarea. Sin embargo, además de esas herramientas, esta Ley también tiene una serie de limitaciones, que dificultan el trabajo de campo del auditor. Generalmente, estas limitaciones son de carácter comunitario, y escapan del ámbito de actuación de la legislación española.

Para poder ejemplificar mejor estas situaciones a las que nos referimos, se han utilizado una serie de casos reales, que sirven para situar al lector.

Finalmente, se realizan una serie de propuestas, que promueven la facilitación del trabajo de los auditores en su día a día. Por otro lado, se proponen una serie de modificaciones legislativas a nivel nacional, como no podía ser de otra forma. Para acabar, y debido a la mención que se ha hecho de las limitaciones que la normativa comunitaria provoca en la lucha contra el blanqueo de capitales, se proponen también una serie de medidas que deberían tomarse desde la propia Unión Europea.

Las conclusiones obtenidas, no son más que el resultado de la investigación llevada a cabo, y tienen como objetivo generar un debate de cara a alcanzar un objetivo final: Facilitar la tarea de los auditores en la detección de blanqueo de capital.

El motivo de la elección de este tema, es debido a que el blanqueo de capitales es un tema de gran actualidad, y que desgraciadamente, seguirá siéndolo durante las próximas décadas. El blanqueo de capitales, es una lacra, que es ajena a fronteras y partidos políticos, que no distingue de razas o de sexos, y afecta a toda la población por igual.

Para todos es conocido, lo difícil que es detectar este delito para las autoridades. Para esta detección, es indispensable la colaboración entre instituciones y países, sin embargo, esto es algo que queda muy lejos de la situación actual.

Las dificultades para la adopción de grandes acuerdos a nivel internacional en esta materia, se materializan en una serie de limitaciones en el trabajo diario de los auditores, que la legislación nacional intenta solventar. No obstante, en algunas ocasiones, la normativa local no presta el suficiente apoyo al trabajo de los auditores, de ahí que surjan ciertas limitaciones en su trabajo.

Por lo tanto, la elección de este tema, se centra en la necesidad de señalar las limitaciones que tiene un auditor en su trabajo diario, para detectar el blanqueo de capitales. Además de proponer una serie de soluciones, o propuestas, de cara a poder mejorar el trabajo de este colectivo en este ámbito, este trabajo sirve para subrayar la

necesidad de la adopción de acuerdos comunes a nivel europeo, para la lucha contra el blanqueo de dinero.

La profesión de la auditoría, es una profesión de gran relevancia social, ya que, del resultado de su trabajo, depende en gran medida la estabilidad de las grandes compañías de un país, y por ende de la credibilidad económica de este en general

En lo que respecta al objeto de este trabajo de investigación, ha sido el análisis de las limitaciones que afectan al trabajo del auditor a la hora de detectar blanqueo de capitales. Para ello, y basándome en las herramientas que la Ley 10/2010 dota a los profesionales de la auditoría, he analizado estas limitaciones y propuesto una serie de soluciones, que facilitarían el trabajo de la auditoría.

Sobre el método utilizado, para la realización de este trabajo de investigación, es importante mencionar, que primeramente realicé un análisis de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de cara a estudiar las herramientas que esta Ley proporcionaba a los auditores para la realización de su tarea. Además, y en vista de que las menciones a estos profesionales son bastante escasas a lo largo de esta Ley, decidí profundizar también en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas.

Después, y mediante el estudio del libro del profesor García Moncó¹, pude ubicar el marco normativo de referencia para la realización del trabajo.

Posteriormente, y mediante la utilización de las NIA- ES, adquirí un conocimiento más exhaustivo del proceso de auditoría, en los casos de fraude (como el de blanqueo de capitales) y las actuaciones de los auditores para la detección de estos. Por otro lado, mediante la búsqueda de casos reales, como los que se exponen a lo largo del trabajo, pude documentar las dificultades reales con las que se encuentra un auditor en este ámbito. Para la búsqueda de estos casos, utilicé la versión web de los principales periódicos del país.

A continuación, y una vez acotadas las limitaciones que consideraba más relevantes, en relación al blanqueo de capitales, los auditores y la Ley 10/2010, realice un proceso de investigación, para profundizar en dichas limitaciones y buscar posibles soluciones a esa situación. Para esta labor e investigación, utilicé de base para la realización de consultas el libro del profesor Mir Fernández². Además, mediante el uso de diversas páginas webs, para la obtención de información y estadísticas de algunos organismos oficiales como el SEPBLAC o el ICAC, tuve acceso a información de carácter institucional de las instituciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Finalmente, obras como la de los profesores Flores Martin y González Botija³, me resultaron de gran ayuda para la realización de la evolución normativa de carácter internacional en el ámbito del blanqueo de capitales.

¹ Véase **Alfonso GARCIA- MONCÓ**, "Blanqueo de Capitales" en *Manual de Materias Jurídicas*, Instituto de Censores Jurados de Cuentas, edición 2017, capítulo 29.

² Véase **Carlos MIR FERNANDEZ**, "*Manual de auditoría y control Interno*".

³ Véase, **Ana Rosa FLORES MARTIN y Fernando GONZÁLEZ BOTIJA**, "*LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO TRAS LA ADHESIÓN DE ESPAÑA A LA UE*" 2

El trabajo, está estructurado en 4 grandes partes, el marco normativo, el estado de la cuestión, la discusión y análisis y las conclusiones.

En lo que respecta al marco normativo, el objetivo principal es hacer una aproximación a la normativa sobre la que pivota el trabajo. De esta forma, se diferencia dos grandes apartados, como son la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas.

De esta forma, se hace un repaso a la evolución que han sufrido estas normas, y a las modificaciones más significativas de las que han sido objeto. Por otro lado, y ante la gran influencia que la normativa europea ha tenido en el desarrollo legislativo español, también se mencionan las Directivas y Tratados que, servido de guía, para la modificación o creación en algunos casos de la normativa española.

Respecto al estado de la cuestión, trata de escenificar las limitaciones con las que se encuentra un auditor a la hora de detectar blanqueo de capitales. En primer lugar, y mediante una breve introducción de lo que es el trabajo de la auditoría, y la definición de una serie de conceptos que pueden resultar de ayuda para la comprensión del texto, trato de introducir cuales son los problemas a los que se enfrenta un auditor a la hora de luchar contra el blanqueo de capitales.

A continuación, he añadido una breve mención a la evolución normativa de carácter internacional que ha sufrido la Ley 10/2010. El objetivo de esta mención, es la de, por un lado, subrayar el carácter internacional que subyace en la lucha contra el blanqueo de capitales. Y, por otro lado, mencionar una serie de tratados de carácter internacional, que sirvieron para establecer los cimientos de organismo como el FAT-GAFI, considerados referentes en materia de blanqueo de capitales a nivel mundial.

El siguiente apartado, el de la introducción al problema, sirve para situar al lector en las limitaciones que vamos a analizar. Así, alcanzamos el pilar de este trabajo, que es el problema sobre el que se sustenta la realización de este, las limitaciones del auditor para detectar blanqueo de capitales.

De esta forma, se plantean dos problemas principales que afectan al trabajo del auditor. Por un lado, he abordado la imposibilidad de revisión de todas y cada una de las partidas que forman parte de las cuentas anuales. De esta forma, existe la posibilidad, de que, habiendo realizado su trabajo de forma correcta, el auditor no haya detectado algún fraude en las cuentas.

Por otro lado, he descrito los problemas que la falta de acceso a la información puede provocar en su trabajo. Habitualmente, estos problemas de acceso a la información, suelen estar relacionados con la ocultación de fraudes, sin embargo, en muchas ocasiones la falta de esta provoca la imposibilidad de continuar con el procedimiento de investigación. Abordaré este problema, desde la perspectiva de que sea la entidad auditada quien dificulte el acceso a la información, y desde la de que sean terceras entidades quienes denieguen esta información.

Después, nos encontramos con un breve repaso, de las responsabilidades y consecuencias derivadas de la actividad de los auditores. De esta forma, se hace una pequeña mención a los tipos de faltas y de sanciones reguladas en la normativa actual.

Para terminar con el estado de la cuestión, he considerado de interés, la exposición de un caso real, en el que se pongan de manifiesto algunas de las situaciones que hemos ido repasando a lo largo del trabajo. La elección de ese caso en particular, responde a la necesidad de subrayar la importancia que tiene en el funcionamiento de la economía de un país, el trabajo de un auditor.

En el cuarto apartado, denominado soluciones, y que podría considerarse también el de discusión y análisis del problema, se plantean las posibles soluciones que podrían aplicarse para poder corregir los problemas que he detectado. Es probablemente la parte más difícil e importante del trabajo. La dificultad, la entraña la intención de hacer una verdadera aportación, que pueda mejorar la situación actual.

Al igual que el planteamiento del problema, el apartado de las soluciones propuestas, está estructurado en dos partes diferenciadas. En la primera parte, la propuesta general gira en torno a la idea de la contratación de los auditores por parte del Estado. Sin embargo, y siendo consciente de la dificultad que puede entrañar tamaña propuesta, y la gran controversia que puede desatar, se proponen también una serie de soluciones parciales para intentar solucionar el problema.

En la segunda parte, las ideas principales que se pueden extraer, son, por un lado, y a nivel nacional la dotación de una mayor potestad a los auditores a la hora de realizar su trabajo. Se trataría, al fin y al cabo, de reforzar la posición de los auditores en ciertos aspectos de su trabajo. Por otro lado, y bajo la premisa de que la normativa nacional está a merced de las decisiones y acuerdo que se adoptan a nivel comunitario, este tipo de soluciones giran en torno a la colaboración a nivel comunitario y de la homogeneización de criterios en relación a aspectos como el secreto bancario o el blanqueo de capitales.

Finalmente, se encuentran las conclusiones. Una vez más, y en sintonía con el resto del trabajo, he estructurado las conclusiones en dos partes, en función de cada limitación o problema a resolver.

Este trabajo, es una humilde aportación para tratar de buscar solución a alguno de los problemas que surgen en la profesión de la auditoría. Siendo consciente de mis limitaciones en este ámbito, he tratado de investigar y sacar a la luz, algunos de los problemas con los que se puede encontrar un auditor a la hora de detectar fraudes en los estados financieros. Una vez analizados, intentaré desde las herramientas que la Ley 10/2010 proporciona, proponer una serie de modificaciones en dicha Ley, de forma que estas limitaciones que el auditor sufre puedan desaparecer.

MARCO NORMATIVO

Fundamentalmente, las Leyes de referencia para la redacción de este trabajo han sido la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. No obstante, ambas le Leyes tienen una fuerte influencia en relación a Directivas y Reglamentos de tipo comunitario, que han servido de base para el desarrollo de la legislación nacional. Sin ir más lejos, la propia Ley 22/2015, nace con el objetivo de adaptar la normativa nacional a la Directiva 2014/56/UE. De esta forma, el marco normativo, está dividido en dos partes. Cada parte corresponde a una Ley, y hace referencia al desarrollo normativo que ha sufrido.

Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo

A la hora de hacer una aproximación, al marco normativo relativo a esta Ley, es necesario poner el foco primeramente en la normativa comunitaria. Tal y como defiende el profesor GARCIA- MONCÓ⁴. La realidad que envuelve este ámbito, comienza con el Tratado de Libre Circulación de Capitales en la Unión Europea.

Según los artículos 63 y 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se establece la plena y completa circulación de capitales entre los estados miembro y terceros Estados (art. 63). Por otro lado, se establece también una reserva de soberanía fiscal en la que está permitida la adopción de medidas de diferenciación fiscal entre residentes y no residentes siempre y cuando no supongan una discriminación o una restricción encubierta a la mencionada libertad en los movimientos de capitales (art. 65).

En el ámbito nacional, el punto de partida para la prevención de blanqueo de capitales, es obviamente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE núm. 103 de 29 de abril). De esta forma, esta Ley transpone la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europea y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, desarrollada en la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006. Además, se establece el régimen sancionador del Reglamento (CE) núm. 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006.

Algunos de los componentes de la Ley 10/2010 (art. 2, 7, 9, 10, 14, 26 y 40) fueron modificados por la disposición final sexta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE núm. 295, de 10 de diciembre) y el Real Decreto- Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas, entre otras materias, en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales (BOE núm. 214 de 4 de septiembre).

⁴ Véase **Alfonso GARCIA- MONCÓ**, “Blanqueo de Capitales” en *Manual de Materias Jurídicas*, Instituto de Censores Jurados de Cuentas, edición 2017, capítulo 29, pág. 786.

Por otro lado, el Título II del Real Decreto- Ley 11/20018, en el artículo segundo, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

Además, hay que tener presente la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (DO 284 de 12 de noviembre de 2018) gracias a la cual, se facilita la cooperación transfronteriza de una forma más rápida y eficaz entre las autoridades competentes.

[Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas](#)

Tal y como se establece en la propia Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE núm. 173, de 21 de julio de 2015) tiene como objetivo principal la adaptación nacional a los cambios producidos en la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, que vino a modificar la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europea y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas. Además de esa directiva, se aprobó el Reglamento (UE) núm. 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión.

Dicha directiva, derogó la Octava Directiva 84/253/CEE, del Consejo, de 10 de abril de 1984, relativa a la autorización de las personas encargadas del control legal de documentos contables. Esta Directiva supuso el nacimiento de la regulación de la actividad de auditoría de cuentas en nuestro ordenamiento jurídico, mediante la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE núm. 169, de 15 de julio de 1988).

El ejercicio de la auditoría de cuentas, es una actividad con una gran relevancia pública, ya que no solo presta un servicio a la entidad revisada, si no que sus actuaciones también suscitan gran interés en terceras personas que puedan estar interesados en la propia empresa. Por esta razón, en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas se establecieron una serie de normas para garantizar que las cuentas anuales que hubieran sido verificadas por un tercero pudieran ser aceptadas con total confianza. También se establecieron, los requisitos y normas de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Por otro lado, se estableció que la potestad disciplinaria en el ámbito de los auditores de cuentas recaería sobre el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Más adelante, se establecieron nuevas formas de acceso a esta profesión. Así, la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado (BOE núm. 156, de 30 de junio de 1990), se introdujo la posibilidad de inscripción en el Registro Oficial de

Audidores de Cuentas (ROAC), por ejemplo, para personas que pese a no tener titulación universitaria pudiesen demostrar una amplia experiencia en la actividad de la auditoría.

La Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1991), modificó la composición del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), y la Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos Propios y supervisión en base consolidada de las Entidades Financieras (BOE núm. 132, de 2 de junio de 1992), vino a modificar el régimen de infracciones y sanciones. Además, esta misma Ley estableció la obligación de la emisión del informe de auditoría a los auditores, en casos en los que comprobaran la presunta existencia de irregularidades.

Posteriormente, en la Ley 3/1994, de 14 de abril, mediante la cual se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación bancaria (BOE núm. 99, de 26 de abril de 1994) y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, las entidades de crédito extranjeras fueron obligadas a someter sus cuentas a auditoría para las sucursales que tengan en España.

Por otro lado, la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 1998), estableció la obligación a los auditores de comunicar rápidamente a el Banco de España, a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y a la Dirección General de Seguros cualquier información que pudiera afectar a posibilidad de continuidad de entidades sometidas al régimen de supervisión de estos organismos.

Mediante la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (BOE núm. 281, de 23 de noviembre de 2002), en los artículos 48 a 53 introdujo una serie de modificaciones relativas al trabajo de auditoría. Estas modificaciones, giran en torno a la formación y acceso a la profesión de auditor de cuentas.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas y del orden social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 2003), vino a modificar ciertos aspectos de los órganos rectores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Una de las reformas más sustanciales de la Ley, se produjo con la entrada en vigor de la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, para su adaptación a la normativa comunitaria. De esta forma, esta Ley transponía el ordenamiento jurídico nacional a la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, mediante la cual se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo. El principal objetivo de esta Directiva, era el de armonizar la actividad de la auditoría a nivel comunitario.

Debido a los cambios en el aspecto social, económico y político producidos en los últimos años, y en especial la crisis financiera sufrida pone en cuestión una modificación del marco normativo comunitario en el aspecto de la auditoría de cuentas, debido a la gran importancia de esta actividad a la hora de evitar situaciones como la vivida en la crisis del 2008. Esta situación da lugar al nacimiento por un lado de la Directiva

2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y por el otro del Reglamento (UE) núm. 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014.

Por último, la estructura de esta Ley debe entenderse dentro del objetivo de su adecuación dentro del Reglamento (UE) núm. 537/2014, de 16 de abril, y de la Directiva 2014/56/UE. Ambos documentos, constituyen el régimen jurídico de referencia en el ámbito de la auditoría, dentro de la Unión Europea.

ESTADO DE LA CUESTION

Introducción

En términos generales, la actividad de la auditoría no es más que la revisión de una actividad para verificar el cumplimiento de las normas o criterios que estén establecidos. En el ámbito de la información financiera, el que nos ocupa, este procedimiento de auditoría consiste en la revisión de las cuentas anuales de una empresa por parte de un experto independiente, el **auditor de cuentas**. De esta forma, el auditor tiene como labor la emisión de un informe sobre la fiabilidad y veracidad de la información financiera publicada en las cuentas anuales de la empresa.

La Ley 22/2015 (art. 1.2) define así la auditoría de cuentas:

“Se entenderá por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros.”

Pese a que profundizaremos más en el asunto, resulta obvio, que el auditor no puede rehacer y revisar todos y cada uno de los movimientos contables que figuran en las cuentas anuales. Esto se debe a la gran cantidad de datos que se manejan en este tipo de informes. De esta forma, mediante la utilización de técnicas de muestreo y aplicando el principio de *importancia relativa*, el experto independiente tiene que emitir una valoración sobre las cuentas que este analizando. Así el auditor, nunca obtendrá una seguridad absoluta de que no existan incorrecciones en dichas cuentas. A esta ausencia de certeza absoluta, se la denomina riesgo de auditoría, que analizaré más adelante. Por lo tanto, en algunas ocasiones, un auditor puede emitir una opinión favorable sobre unas cuentas anuales en las que exista algún tipo de error o fraude.

Generalmente, este tipo de limitaciones en el trabajo del auditor, facilita la ocultación de fraudes, y de activos de procedencia ilícita. De esta forma, los delincuentes tratan de aprovechar estas situaciones para blanquear dinero. Como analizaremos más adelante, existen algunas limitaciones, que impiden al auditor detectar este tipo de fraudes.

Además, y debido a la gran relevancia que tiene el trabajo del auditor, la no detección de este tipo de fraudes, puede suponer sanciones, en caso de evidenciarse una negligencia en su actuación.

Por otro lado, el auditor requiere de información proveniente no solo de las cuentas anuales que está verificando, sino también de terceros. Esto provoca, por un lado, que no pueda acceder a toda la información que requiere para su labor, o que la información que recibe no sea del todo fiable. Dentro de este ámbito, incluiremos también, las dificultades que tiene un auditor para obtener información, cuando el origen de esta información es de entidades de otro territorio.

Debido al proceso de globalización e internacionalización de la economía a nivel mundial, las transacciones y relaciones comerciales a un nivel transfronterizo son constantes. En muchas ocasiones, las dificultades que el rastreo de estas transacciones supone a las autoridades, provoca, que los delincuentes utilicen estos medios para ocultar sus actividades ilícitas. La normativa nacional, ha intentado limitar las posibilidades de ocurrencia de este tipo de delitos, mediante el establecimiento de limitaciones a las cantidades de capital que se pueden trasladar de un país a otro, sin su previa declaración.

Sin embargo, el problema del blanqueo de capitales sigue latente, y su erradicación es realmente complicada. Los auditores, en la realización de su trabajo, tienen una serie de mecanismos para detectar situaciones en las que se está produciendo este delito. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones, la falta de información a la que nos hemos referido, provoca que este no pueda llevar a cabo su trabajo.

Además, los sistemas actuales de denuncia e investigación de las autoridades, están sujetos a procesos enormemente burocráticos, que dilatan las investigaciones a lo largo de varios años.

Este tipo de limitaciones en el trabajo del auditor serán las que analicemos en este trabajo. Para ello, profundizaremos en las herramientas que la Ley 10/2010 dota al auditor para hacer frente a este tipo de limitaciones, y propondremos soluciones en caso de haberlas.

Precisiones terminológicas

En primer lugar, y antes de analizar la problemática que se plantea en ese trabajo, es necesario aclarar varios conceptos. Para poder explicar, que es un auditor de cuentas, y cuál es su labor, es necesario definir que es la auditoría de cuentas.

Centrándonos en el concepto que da nombre a la Ley 28/2010 de 28 de abril, relativa a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, se considerará *blanqueo de capitales* las siguientes actividades:

- a) *La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva.*
- b) *La ocultación de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva.*
- c) *La adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva.*
- d) *La participación en alguna de las actividades mencionadas anteriormente, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas.*

Y es que, tal y como dictan las normas técnicas de auditoría, el auditor deberá llevar a cabo su tarea con un permanente *escepticismo profesional*. Este concepto, indispensable para la labor de la auditoría, “*no es más que una mentalidad inquisitiva con*

una especial atención hacia las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles errores o fraudes”, según las palabras de profesor Fernández Mir⁵. De esta forma, la NIA-ES 240 evidencia que⁶ “...el auditor es responsable de mantener una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría...”

Por lo tanto, el auditor puede encontrarse tanto con errores como con fraudes a la hora de analizar las cuentas anuales de una empresa. En el segundo caso, se presupone una intencionalidad, por lo que generalmente su detección resulta más compleja.

Es importante mencionar, que los errores o incorrecciones que realmente resultan de importancia para el auditor son aquellos que provocan incorrecciones materiales en los estados financieros, es decir aquellos que provocan que las cuentas anuales no reflejen una imagen fiel de la situación de la empresa.

Y es que aquí entra en juego otro concepto indispensable en la auditoría, el de la *importancia relativa*. Este es un concepto clave en la auditoría. La importancia relativa es un principio o criterio de especial importancia. Hace referencia a la significatividad o no que pueda tener una partida. Tal y como establecen las NIA-ES⁷, el concepto de importancia relativa se encuentra presente de manera permanente de dentro de la actividad de auditoría, aplicándose tanto en la planificación y ejecución. Se trata de un concepto inherente al trabajo del auditor.

Otro de los conceptos indispensables para desarrollar este trabajo es el de *Paraíso Fiscal*. Su definición es algo ambigua, ya que, puede cambiar de un territorio a otro. No obstante, nos ceñiremos a las definiciones que nos proporciona tanto al OCDE⁸ como la legislación española.

Según la OCDE, son cuatro las características que definen a un territorio como paraíso fiscal. La primera sería que la jurisdicción no imponga impuestos, o que lo haga de forma nominal⁹. A continuación, debería de existir una ausencia absoluta de transparencia. Por otro lado, las Leyes o prácticas administrativas, deben evitar o dificultar en intercambio de información con fines fiscales con otros territorios. Por último, no se exigirá el desarrollo de una actividad efectiva dentro de su propio territorio.

En consonancia con esta definición, a nivel nacional encontramos la que figura en la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. En este caso, la legislación española establece una serie de condiciones para denominar a un territorio paraíso fiscal:

- *Excluye a aquellos territorios con los que existe un convenio de colaboración para evitar la doble imposición¹⁰.*

⁵ Véase **Carlos MIR FERNANDEZ**, “Manual de auditoría y control Interno”.

⁶ NIA-ES 240. **Responsabilidades del auditor en la auditoría de los Estados Financieros respecto al fraude**. Responsabilidad del auditor. Apartado 5.

⁷ NIA-ES 320. **Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría**.

⁸ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

⁹ Impuesto nominal: Referido a tipos de gravamen diseñados *ad hoc* para cada sujeto de forma individual, en función de las circunstancias personales.

¹⁰ Por doble imposición se entiende el hecho de que sobre una misma manifestación de riqueza incidan varios impuestos en un mismo periodo impositivo.

- *Existirá una tributación nula cuando en el territorio de que se trate, no se aplique un impuesto idéntico al impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto de Sociedades o al impuesto sobre la Renta de No Residentes. Para la consideración de aplicación de un impuesto análogo, deberá de existir un convenio suscrito con España con el fin de evitar la doble imposición.*

Como podemos observar en el caso nacional, la definición es más ambigua, ya que, tan solo se centra en la colaboración entre terceros países con España. Es decir, el requisito básico establecido es el de colaboración. Por lo tanto, pueden y existen países, que pese a cumplir algunos de los requisitos establecidos por la OCDE (cargas fiscales muy bajas) mantienen un nivel fluido de comunicación. Por lo tanto, no son considerados paraísos fiscales por las autoridades españolas. De esta forma, algunos territorios pueden considerarse paraíso fiscal por parte de la OCDE, pero no por parte de España.

Un ejemplo muy claro lo podemos encontrar en un país miembro de la Unión Europea. El caso de los Países Bajos, entre otros, se adapta perfectamente a la definición mencionada arriba. Mediante el termino coloquialmente conocido como “*sándwich holandés*”, grandes corporaciones con sede fiscal en este país, aprovechan el sistema tributario de este para obtener grandes ventajas fiscales.

El sistema es muy sencillo, debido a que la mayoría de países imponen restricciones para el traslado de capitales a paraíso fiscales, países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo... atraen a grandes corporaciones a sus territorios ofertando una carga tributaria baja. De esta forma, el capital fluye a través de estos países mediante empresas buzón¹¹.

Ciñéndonos a la definición de la OCDE, estos países serían considerados paraísos fiscales, no obstante, ciñéndonos a la de la normativa nacional no sería así. Este, es un tema muy controvertido, ya que en los listados periódicos que las autoridades publican sobre los países que se consideran paraísos fiscales, nunca figuran países miembros de la Unión Europea.

Sin embargo, en lo relativo a los países de fuera de la comunidad, la Unión Europea confecciona una “lista negra” de países y territorios no cooperadores en materia fiscal. La lista está compuesta por los siguientes países:

- Guam
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos
- Samoa
- Samoa Americana
- Trinidad y Tobago
- Barbados
- Emiratos Árabes Unidos
- Islas Marshall
- Aruba
- Belice
- Bermudas
- Dominica

¹¹ Oficinas físicas sin empleados ni actividad real.

- Fiyi
- Omán
- Vanuatu

Según afirma Pier Moscovici¹² “*La lista de paraísos fiscales de la UE constituye una verdadera victoria europea, y ha tenido un efecto rotundo en la transparencia y en la equidad fiscales en todo el mundo*”. Según los responsables comunitarios, la utilización de esta lista ha tenido un éxito rotundo, ya que muchos de los países que en un principio se incluyeron aquí han modificado sus sistemas fiscales y jurídicos para poder cumplir con las normas impuestas por la Unión Europea.

Otro de los conceptos que encontraremos a lo largo del trabajo, es el de las limitaciones. En el ámbito de la auditoría, existen diferentes tipos de limitaciones. La *limitación inherente*, implica que cualquier trabajo de auditoría es susceptible de contener errores. Tal y como hemos explicado anteriormente, esto debe a numerosos factores.

Por otro lado, la *limitación al alcance*, que también aparecerá más adelante se produce cuando un auditor no puede aplicar parcial o totalmente uno o varios procedimientos de auditoría que se consideran necesarios para emitir su opinión.

La *colusión*, según los autores Alvin A. Arens y James K. Loebbecke¹³, “*es un esfuerzo cooperativo entre los empleados para robar activos o causar errores en los registros*” Es decir, se trataría de esa situación tan común, en la que varios trabajadores de la empresa participarían de forma coordinada para el cometimiento de un fraude.

Otro de los conceptos básicos, a la hora de hablar de blanqueo de capitales, es el de la *contabilidad creativa*. Tal y como dice el profesor Carlos Mir Fernández¹⁴, “*...la cual bordea en determinados casos la normativa y el concepto de irregularidad dentro del terreno más puramente de la información financiera...*” “*El concepto de contabilidad creativa considera el uso de la normativa flexible en beneficio de la entidad, ofreciendo unos estados financieros diferentes a los contemplados, retorciendo la propia normativa. Esto es, la contabilidad creativa da vueltas a las normas para buscar una presentación diferente del patrimonio de la entidad*”.

Lo que viene a exponer aquí el profesor, es que, en algunas ocasiones las empresas, utilizan la flexibilidad de las normas para poder adaptar la imagen de las cuentas anuales en su beneficio. Ciertamente, supone una gran dificultad para el auditor determinar, donde termina la legalidad y donde empieza el fraude.

Evolución normativa

Debido a que el blanqueo de capitales, es un problema de dimensión internacional, y que este hecho explica el desarrollo que ha sufrido la normativa nacional actual, es importante hacer un breve repaso sobre la evolución normativa a nivel internacional y comunitario, para terminar así en la legislación vigente a nivel nacional.

¹² Comisario de Asuntos económicos y financieros, fiscalidad y aduanas de la Unión Europea

¹³ Véase **Alvin A. ARENS y James K. LOEBBECKE**, “*AUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRAL*”. XI edición.

¹⁴ Véase **Carlos MIR FERNANDEZ**, “*MANUAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO*” Tema 19, pág. 639-640.

Si bien es cierto que tanto las actividades ilícitas como el blanqueo y la ocultación de capitales ha existido siempre, en las últimas décadas del siglo XX el blanqueo de capitales adquirió una relevancia de carácter internacional debido principalmente al auge del narcotráfico. De ahí, que en la década de los 80 surgiese una mayor implicación por parte de las autoridades para luchar contra esta lacra.

Según los profesores Ana Rosa Flores Martin y Fernando González Botija¹⁵, *“El crecimiento exponencial que sufrió el narcotráfico a nivel internacional tanto a finales del siglo XX como a comienzos del XXI se debió principalmente a dos razones. Por un lado, el desarrollo económico en las economías occidentales, y por otro lado el proceso de la globalización de la economía”*. Debido a esta creciente influencia que el capital procedente del narcotráfico adquirió en la economía mundial, la comunidad internacional decidió ponerle freno a esa situación. De esta forma, se fueron llevando a cabo una serie tratados internacionales, que fueron desarrollándose a nivel nacional para llegar entre otros a la Ley 10/2010 que aquí nos ocupa.

- **Declaración de principios de Basilea** del 12 de diciembre de 1988 sobre prevención en la utilización del sistema bancario para blanquear fondos de origen criminal. Esta declaración fue firmada por los representantes de los Bancos Centrales y autoridades monetarias del G-10 (Alemania, Bélgica, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Suecia). El objetivo principal de esta declaración fue impedir que los bancos y otras instituciones financieras fueran utilizados para actividades de procedencia ilícita y fomentar un mayor grado de cooperación internacional.
- **Convención de Viena** del 20 de diciembre de 1988. En este caso, fue una convención auspiciada por las Naciones Unidas, y pese a que estaba principalmente enfocada en la lucha contra el tráfico de drogas, es importante mencionarla ya que, tal y como mencionan los profesores Ana Rosa Flores Martin y Fernando González Botija¹⁶ en esta convención por primera vez se va a definir el concepto de “blanqueo de capitales”.
- **Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo 1990.** Ante el progresivo aumento de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales en 1986 la Conferencia de Ministros Europeos se vio obligada a centrar la discusión en este tema. Con el objeto de darle mayor proyección internacional, también se invitó a países como EEUU, Australia o Canadá. El objetivo, era una vez más fomentar la cooperación internacional.
- **1990 grupo de acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI)** es un organismo intergubernamental cuyo objetivo es elaborar y proponer medidas para combatir el blanqueo de capitales. Formado por expertos procedentes de la mayoría de países del mundo, se encarga de la adopción de medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y operativas en relación al blanqueo de capital a nivel internacional.

¹⁵ Véase, Ana Rosa FLORES MARTIN y Fernando GONZÁLEZ BOTIJA, *“La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tras la adhesión de España a la UE”* pág. 93 párrafo 2.

¹⁶ Véase, Ana Rosa FLORES MARTIN y Fernando GONZÁLEZ BOTIJA, *“La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tras la adhesión de España a la UE”*.

Es un organismo de referencia a nivel internacional, y en 1990 emitieron una serie de recomendaciones para la lucha en contra del blanqueo de capitales. Las 40 recomendaciones han sido aceptadas por más de 130 países y se constituyen un estándar internacional anti lavado de capitalesⁱ.

Después de los cambios políticos y sociales que vivió la Comunidad Europea en la década de 1990, el proceso de integración económica que llevaron a cabo los entonces miembros de la Comunidad Económica Europea, se publicaron una serie de directivas con la idea de homogeneizar las actuaciones de los países miembros en distintas materias, entre ellas en la del blanqueo de capitales.

- **Directiva 91/308 de Consejo Europeo, 10 de junio de 1991**, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. El origen de esta directiva fue consecuencia de las presiones ejercidas por EEUU. Si bien al principio fue creada como una Recomendación, finalmente y tras la decisión de la Comisión Europea adoptó la forma de Directiva. Además, dicha Directiva obligaba a los estados miembro a armonizar su legislación con el contenido de esta Directiva antes del 1 de enero de 1993. Esta Directiva representa la primera etapa a nivel comunitario en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- **Directiva 2001/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de 2001**. Esta Directiva, modifica la anterior Directiva. Según el texto, lo que se buscaba era garantizar la protección del sector financiero y de otras actividades vulnerables frente a los efectos perniciosos de las actividades delictivas.
- **Directiva 2005/60 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005**. Tras la entrada en vigor de la Directiva 2004/308/CE relativa a la libre circulación de capitales y personas dentro del mercado común, se vio necesaria una actualización de las Directivas anteriores relativas a la prevención del blanqueo de capitales. Tal y como expresa el considerando previo a la Directiva, la entrada masiva de flujos de dinero negro puede dañar tanto la estabilidad como la reputación del sistema financiero del mercado común, por ello subraya la importancia de una actuación preventiva. Uno de los objetivos de dicha Directiva, fue la adopción de medidas en el ámbito comunitario, a fin de evitar que los Estados miembros optasen por medidas para proteger su propio sistema financiero, que pudieran ser contrarias al funcionamiento del mercado común.
- **Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo 20 de mayo de 2015**. Esta nueva Directiva se vio necesaria debido a que el GAFI realizó una actualización de sus Cuarenta Recomendaciones. Se crea, además, la famosa “lista negra” de países de alto riesgo, hasta ahora, tan solo existía una “lista blanca” de países que cumplieran con sus obligaciones.
- **Directiva 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018**. Una vez más, y debido a los nuevos métodos que delincuentes y terroristas utilizan para financiar sus actividades, el Consejo Europeo se ve obligado a actualizar su

normativa en lo relativo a la prevención del blanqueo de capitales. Hasta la fecha es la directiva más reciente en lo que a esto respecta. Esta Directiva, se ve influenciada por los actos terroristas que han sufrido varios países europeos en los últimos años.

Introducción al problema

El objetivo principal de una auditoría es el aumento del grado de confianza de los usuarios en los estados financieros formulados por la empresa. Para ello, el auditor deberá expresar su opinión sobre si dichos Estados Financieros, han sido preparados en consonancia con el marco de información financiera aplicable. El auditor deberá obtener una seguridad razonable de que dichos estados financieros están libres de cualquier tipo de incorrección material. No obstante, y pese a que es trabajo del auditor obtener un grado alto de seguridad de la ausencia de errores, no existe una certeza absoluta de que esta afirmación sea cierta, debido a las limitaciones inherentes de la auditoría.

Y es que las limitaciones que el auditor se encuentra en su trabajo, provocan la existencia de ciertos riesgos de auditoría, tal y como establece la NIA-ES 200¹⁷, cuando un auditor emite una opinión acerca de unos estados financieros, siempre se enfrentará a la posibilidad de que dicha opinión sea incorrecta. Bien porque haya pasado por alto un error, o bien por la existencia de algún tipo de fraude.

Además, existe la posibilidad de que las cuentas anuales hayan sido formuladas en fraude, generalmente, este hecho dificulta de sobremanera el trabajo del auditor. Esto se debe a que, quien comete una ilegalidad, pone todos los medios a su alcance para ocultarla. En el caso que analizamos, el del blanqueo de capitales, el auditor se encuentra con grandes dificultades para realizar su trabajo. De esta forma, a las limitaciones inherentes al trabajo de auditoría, le añadimos las que le provoca la existencia de activos procedentes del blanqueo de capitales.

Ambos conceptos están estrechamente relacionados, es decir, el de las limitaciones del trabajo de auditoría y el de las limitaciones que el blanqueo de capitales provoca en el trabajo del auditor. Y es que, generalmente, cuando los auditores se encuentran con algunas limitaciones inherentes a la auditoría, como puede ser, problemas en la circularización de una partida contable, o directamente ausencia de información acerca de algunas partidas relevantes, suelen estar relacionadas con fraudes del tipo del blanqueo de capitales.

Sin embargo, antes de profundizar en este asunto, es importante entender cuáles son las limitaciones que un auditor tiene en la realización de su tarea. Tal y como he mencionado, existe la posibilidad, de que pese a haber realizado su tarea en concordancia a las normas, el auditor pase por alto algún error en las cuentas anuales.

A la probabilidad de suceso de este error, se le conoce como “riesgo de auditoría”. La posibilidad de ocurrencia de ese error, se debe a que el auditor no revisa la totalidad

¹⁷ Véase NIA- ES 200. **Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría**

de las cuentas, sino que, usando pruebas selectivas de muestreo, emite una opinión sobre la totalidad de ellas. Es decir, es imposible que exista una certeza absoluta sobre la ausencia de errores en las cuentas anuales.

Existen tres tipos de riesgos de auditoría:

- Riesgo inherente: Es la presunción de que toda partida contable, puede estar registrada evaluada o presentada de forma errónea. Las provisiones y estimaciones suelen ser dos de las partidas que más veces incluyen este tipo de error.
- Riesgo de control: Consiste en la posibilidad de que los sistemas de control interno y externo sean incapaces de prevenir, detectar, o corregir errores de importancia relativa en las cifras de estados financieros.
- Riesgo de detección: Es responsabilidad directa del auditor, y se basa en la idea de que este cometa errores a lo largo de la auditoría de los estados financieros, de forma que acabe emitiendo una opinión equivocada.

El auditor, llevará a cabo su labor asumiendo la existencia de errores. El objetivo final, no es la ausencia de estos, sino la ausencia de errores materiales, que provoquen que las cuentas anuales no reflejen la situación real de la empresa. Por lo tanto, el error es asumido y aceptado por parte del auditor, siempre y cuando este dentro de ciertos parámetros. Es en este contexto, en el que el concepto de importancia relativa arriba mencionado adquiere su significado.

Centrándonos en este último riesgo, el riesgo de detección, podemos afirmar que incluso cuando una auditoría se planifica y ejecuta adecuadamente puede surgir. Y es que, evidentemente, es más difícil detectar una irregularidad que un error, ya que, el primero, al ser intencionado ira acompañado de una serie de acciones con el objetivo de ocultarlo.

Para evitar la aparición de este tipo de riesgos, el auditor deberá seguir un minucioso proceso antes del comienzo de cualquier trabajo de auditoría:

1. Deberá definir los términos del trabajo de mutuo acuerdo con su cliente, mediante la redacción de una carta de compromiso.
2. Obtendrá un amplio conocimiento de la entidad y de su entorno.
3. Evaluará exhaustivamente los sistemas de control interno.
4. Formulará un plan global y un programa de auditoría.
5. Obtendrá evidencia de auditoría acerca de la razonabilidad de las cifras de los estados financieros.

En la mayoría de los casos de fraude, la no detección no está relacionada con la falta de pericia o habilidad del auditor, existen una serie de causas que provocan el hecho de que un auditor pase por alto un fraude.

En algunos casos, y debido a que el profesional ya ha realizado con anterioridad trabajos de auditoría para la misma empresa, se puede producir una relación de cierta confianza en sus actuaciones. Esto puede provocar que el auditor, a la hora de ejecutar ciertos procedimientos de auditoría relaje un poco su actuación. Esta relajación, puede ser utilizada para ocultar fraudes. Un ejemplo muy típico, sería una confirmación de saldos. Esta es una actuación que debería llevar a cabo el propio auditor, sin embargo, en algunas

situaciones en las que existe cierta relación comercial este podría delegar en la propia empresa la realización de las circularizaciones, con el consiguiente riesgo de ocultación de errores y fraudes.

Este tipo de situaciones, se pueden evitar mediante rotaciones de los equipos de trabajo o de la propia firma de auditoría.

Otra de las situaciones que pueden darse es la de falta de independencia por parte de la firma de auditoría. Tal y como veremos, en algunas ocasiones, la gran mayoría de firmas de auditoría también ofrecen servicios de consultoría. De esta forma, en algunas ocasiones, la misma firma puede ofrecerle servicios de consultoría y de auditoría a la misma empresa. En esta situación, se puede producir un conflicto de intereses, o una falta de independencia. La misma firma de auditoría que le ayuda a la confección de las cuentas anuales, es quien posteriormente se encarga de auditar esas cuentas.

Por último, otra de las circunstancias que dificultan enormemente la detección de fraudes por parte de los auditores es la utilización de paraísos fiscales. Tal y como estudiaremos, el rastreo y seguimiento de activos (generalmente financiero) provenientes de paraísos fiscales es harto difícil. Y es que, pese a que el proceso de blanqueo de capitales es relativamente complicado en algunas de sus fases, una vez se consigue introducir en el sistema financiero, su detección es realmente complicada.

Limitaciones en el trabajo de auditoría

Quizás una la limitación más obvia que se puede encontrar un auditor a la hora de detectar un error en las cuentas, sería la imposibilidad de revisar todos y cada uno de los movimientos contables. Como ya he mencionado con anterioridad, el riesgo de detección puede aceptarse, en caso de que no afecte a la imagen de las cuentas anuales de manera global. Es decir, que dicho error no provoque que las cuentas anuales no den una imagen fiel de la empresa.

A modo de ejemplo, el valor de una partida contable, podría figurar de forma errónea, si este error no modifica la imagen de las cuentas anuales en general. El auditor podrá pasar por alto errores como estos, sin que este hecho tenga consecuencias en el resultado final del informe de auditoría. Sin embargo, en el caso de no detectar un error en una partida contable considerada clave para la empresa, puede suponer que la imagen que representan las cuentas anuales no sea real, por lo tanto, el auditor no puede pasar por alto un error semejante. Generalmente, el profesional suele poner especial énfasis en el análisis de este tipo de partidas, debido a la importancia que entrañan en el resultado final de su trabajo.

No obstante, debido a los grandes volúmenes de datos que se manejan, y a la imposibilidad de analizar todos ellos sin incurrir en costes desproporcionados el auditor no puede hacer pruebas sobre todas las transacciones. Para ello, utiliza métodos de muestreo para seleccionar transacciones y saldos que inspeccionar. Por esta razón, existe un riesgo inherente a los procedimientos de auditoría, ya que, pese a haber aplicado de

forma correcta y haber seleccionado muestras representativas, existe la posibilidad de que ciertos errores materiales no hayan sido detectados.

La utilización de métodos de muestreo, supone una mejora del alcance de la auditoría, y de la eficiencia de esta. Tal y como hemos comentado, la imposibilidad de revisión de todas y cada una de las partidas que componen las cuentas anuales de una empresa, provoca la utilización de sistemas alternativos para que el auditor obtenga la evidencia necesaria para emitir su opinión. En un trabajo de auditoría, debe obtenerse evidencia suficiente y adecuada mediante la realización de las pruebas de auditoría, para que el auditor pueda emitir un juicio razonable sobre los estados financieros que está examinando

Muestreo de auditoría, es según las NIA 530¹⁸: *“aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población”*.

Por lo tanto, resulta evidente la posibilidad de existencia de errores, que no son detectados. De esta forma, definiríamos el riesgo de muestreo¹⁹ como, *“riesgo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda diferir de la que obtendría aplicando el mismo procedimiento de auditoría a toda la población”*. El riesgo de auditoría está latente en el trabajo diario del auditor. Así, este deberá basar y organizar su trabajo bajo la premisa de la existencia de este riesgo. A la hora de planear su trabajo, el propio auditor debe establecer un nivel de error tolerable. Se trata del número máximo de errores que el auditor está dispuesto a aceptar y, aun así, llegar a la conclusión de que el objetivo es correcto.

No obstante, y con el objetivo de minimizar al máximo la ocurrencia de este riesgo, el auditor puede aplicar técnicas de muestreo no estadístico. En este caso, el auditor utilizara su propio conocimiento y experiencia para determinar el tamaño de la muestra. En contraposición a este, encontramos el muestreo estadístico, que es aleatorio y sistemático, y utiliza una base matemática para el cálculo de la población a investigar.

Una vez terminada su labor, deberá evaluar los resultados de la muestra, de cara a poder analizar los errores detectados, y el efecto que estos puede tener sobre la imagen de las cuentas anuales. Además, existe la posibilidad de que los errores detectados resulten de carácter intencionado, con el objetivo de evitar el control por parte del auditor, y poder ocultar hechos fraudulentos.

En caso de ser así, y de identificar el auditor que muchos de los errores comparten algún tipo de característica común, deberá poner especial atención a este hecho, y ampliar los procedimientos de auditoría en caso de considerarlo necesario. Y es que este tipo de actuaciones, pueden conducir a la ocultación de un fraude, y por eso el auditor deberá de poner especial atención en ellos.

¹⁸ Véase NIA-ES 530. Muestreo de auditoría.

¹⁹ Véase NIA-ES 530. Muestreo de auditoría.

Existe una relación inversa entre el riesgo de auditoría y el coste que supone eliminarlo. Es decir, cuanto más profundo sea el análisis del auditor, más difícil es que exista riesgo de detección. No obstante, el coste del servicio aumenta, por lo que el auditor deberá buscar un equilibrio entre ambos conceptos.

De esta forma, tanto el riesgo de detección como el de muestreo, pueden producir que un auditor, pese a haber aplicado correctamente el procedimiento de auditoría, no haya detectado algún tipo de fraude relacionado con el blanqueo. Como explicaremos a continuación, existen indicios o partidas que pueden llevar a pensar la existencia de blanqueo de capitales. Sin embargo, al realizar una revisión de las cuentas anuales por muestreo, el hecho de no detectar dichas irregularidades es totalmente factible.

En caso de darse esta situación, la dificultad de determinación de si el auditor debería ser responsable de no haber detectado dicho fraude o no es muy grande. Como podemos ver en el siguiente caso, una firma de auditoría fue condenada a abonar una indemnización, provocada por no haber detectado un fraude por parte de la empresa. Sin embargo, y pese a que el juez determinó que esta firma de auditoría actuó de forma negligente, la firma de auditoría argumentó la utilización de métodos de muestreo. En situaciones como esta, la labor de auditoría no está exenta de riesgos, ya que, el juez puede determinar su culpabilidad y aplicarle algún tipo de sanción.

Tal y como he dicho, en el siguiente caso, observamos como una firma de auditoría fue obligada a indemnizar a un cliente debido a negligencia a la hora de realizar la auditoría de cuentas de dicha empresa. En este caso, el administrador de una empresa de chatarra, desviaba parte del material que recibía, de forma que posteriormente hinchaba los ingresos de la empresa generando un beneficio que realmente no se producía. La firma de auditoría, esgrimía el argumento de que la información que recibía por parte de la administración de la empresa era “voluntariamente inexacta” y que el procedimiento de auditoría llevado a cabo era correcto por parte de los profesionales que realizaron la auditoría. No obstante, el juez determinó que la firma de auditoría debía pagar la mitad del importe que la empresa abonó en concepto de impuesto de sociedades.

Mediante este ejemplo, podemos observar, por un lado, la responsabilidad que asume un auditor a la hora de emitir un informe de auditoría. Y, por otro lado, como es posible que el auditor pase por alto cierta información, especialmente en situaciones en las que la administración le proporciona información errónea. Pese a haber realizado su tarea de forma correcta, debido a las limitaciones inherentes propias de la actividad de la auditoría, el profesional no detectó el fraude que cometía el propio administrador de la chatarrería. Tal y como esgrimió el auditor, para la realización de la auditoría utilizó un sistema de muestreo selectivo. Este procedimiento no le permitió detectar el fraude.

En este caso, el auditor fue condenado por negligencia. Sin embargo, nos sirve para entender, como el hecho de que es posible que, debido a la utilización de técnicas de muestreo, el auditor pase por alto algún tipo de error. Más si cabe, si por parte de la dirección de la empresa a auditar existe colusión, o la voluntad de ocultar algún tipo de fraude por parte de uno o varios trabajadores.

Sin embargo, existen otros tipos de limitaciones para el auditor, a la hora de detectar fraudes. Este tipo de limitaciones están relacionadas, con la dificultad de acceso

a información. Muchas veces, esta ausencia de información viene provocada por la entidad cuyas cuentas anuales está revisando o por terceros ajenos a la entidad.

Tal y como he mencionado con anterioridad, la labor del auditor consiste en emitir una opinión sobre la veracidad de las cuentas anuales que está analizando. Según la Ley 10/2010 en los artículos 2.1 y 2.5, el auditor de cuentas ostenta la condición de sujeto obligado, lo que provoca que este tenga que tomar una serie de medidas, antes de la realización de un trabajo de auditoría. Este tipo de medidas, hacen especial hincapié en el establecimiento de medidas de control interno. Entre otros, los sujetos obligados serán objeto de un examen anual por un experto externo que deberá emitir informe de acuerdo con las normas detalladas en el RD 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Como podemos observar en las estadísticas obtenidas de la CPBC²⁰, el blanqueo de capitales es un delito que adquiere una gran relevancia a nivel internacional. Los movimientos de capital entre distintos países generan grandes dificultades para el trabajo del auditor.

Tal y como establece el RD 304/2014, las transferencias de fondos hacia o desde otros territorios superiores a 30.000€ deben declararse. El siguiente gráfico, muestra la evolución de este tipo de transacciones, que es claramente ascendente. Esto evidencia la tendencia al crecimiento de las relaciones financieras y comerciales a nivel internacional, lo que refuerza el argumento de que el movimiento de capitales a nivel transnacional tiene una evolución creciente.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Núm. de operaciones | 300.068 | 310.457 | 313.040 | 390.974 | 414.357 | 398.651 |

Tabla 1: Declaraciones de transferencias superiores a 30.000€ (Art. 27.1c RD 304/2014)²¹

Por otro lado, la propia Ley 10/2010 establece también que los movimientos de efectivo tanto de entrada como de salida de territorio nacional por un importe superior o igual a 10.000€ debe declararse. Vemos también, como evoluciona de forma creciente año tras año.

²⁰ Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

²¹ Fuente: **Memoria de Información Estadística. Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.** Página 27.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Núm. declaraciones de entrada | 4.235 | 5.238 | 5.575 | 6.228 | 6.393 | 7.175 |
| Núm. declaraciones de salida | 6.639 | 6.619 | 6.838 | 8.809 | 9.611 | 9.216 |

Tabla 2: Movimientos de efectivos superiores o iguales a 10.000€ (Ley 10/2010 Art. 34 1.a)²²

Estos datos, sirven para corroborar la afirmación hecha anteriormente, y es que, debido al aumento de movimiento de capitales a nivel internacional, la dificultad de detección y rastreo de capitales ilícitos se dificulta de forma manifiesta.

Antes de profundizar en las limitaciones que tiene un auditor a la hora de detectar el blanqueo de capitales en su trabajo, explicaré brevemente cual es el procedimiento más habitual para la comisión de este delito. Y es que, pese a que existen numerosas formas de blanquear dinero, hay una serie de pautas comunes que podrían definir cualquier proceso de blanqueo de dinero, y cuyo objetivo final es alejar lo máximo posible el dinero del delito, y dificultar en la mayor medida de lo posible el seguimiento de su rastro. No es objetivo de este trabajo la redacción de un manual de blanqueo de capitales. No obstante, considero importante la mención de las pautas o etapas más comunes de este proceso, de cara a poder entender mejor cuando puede actuar el auditor.

El lavado de activos involucra generalmente movimientos de capital entre distintos países, generalmente entre países considerados paraísos fiscales. El objetivo de este movimiento de capital, es el de ocultar la fuente o el origen de estos capitales. De esta forma, si estos se han obtenido de manera ilícita o no han tributado con arreglo a la Ley, los titulares de dichos activos pueden disfrutar esos fondos sin sufrir las consecuencias legales.

Pese a que el blanqueo de capitales es una actividad enormemente imaginativa, en la que los delincuentes invierten ingentes cantidades de dinero en expertos para idear nuevas formas de blanqueo que puedan eludir los controles de las autoridades (mediante la utilización de la contabilidad creativa, entre otros medios), existen una serie de pautas comunes que podría aplicarse a la gran mayoría de casos. El FAT-GAFI propone tres etapas que la gran mayoría de procesos de blanqueo de capitales suelen seguir.

En la primera fase, la de colocación, que se puede considerar la de mayor riesgo para el blanqueador, se introducen en las instituciones financieras las ganancias ilegales. Para eso se sirven de transferencias, giros bancarios, depósitos, etc. Se trata de la fase en la que se da entrada en el sistema financiero de “dinero negro²³”. Para ello, y con el objetivo de no llamar la atención de las autoridades, este tipo de entradas de capital se hace mediante de diversas formas. La más habitual, es la de ingresar sumas de dinero

²² Fuente: **Memoria de Información Estadística. Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias**. Página 27.

²³ Término coloquial con el que nos referimos al dinero que procede de una transacción monetaria que no está declarada ante las autoridades fiscales o monetarias correspondientes.

pequeñas, que no requieran identificación de la procedencia del dinero ni de la persona que lo hace. Es en este tipo de transacciones donde el papel del auditor puede ser fundamental.

En la segunda fase, la de conversión se trata de dificultar el seguimiento del rastro del capital mediante la adquisición de bienes y activos financieros. El objetivo es desligar el origen ilícito del dinero. Es en esta fase, donde se utilizan los paraísos fiscales.

En la tercera y última fase de integración, el capital blanqueado regresa al patrimonio del blanqueador. El dinero, vuelve a estar de forma legal en el sistema económico, por lo que su detección por parte de las autoridades es muy difícil. De esta forma, el delincuente puede disfrutar de estos bienes con aparente normalidad. El “dinero negro” está dentro del sistema financiero, y consta en registros y libros contables por lo que su detección es casi imposible. Tanto para el auditor como para las autoridades, la detección en esta fase resulta muy compleja, ya que como hemos dicho, estos activos cuentan con un soporte legal.

Una vez analizadas las etapas más comunes en el blanqueo de capitales, profundizaremos en el papel que juega un auditor en la detección de este tipo de fraudes. Es en la primera etapa, la de colocación, donde un auditor puede adquirir mayor relevancia.

Podría darse el caso, de que un delincuente tratase de utilizar una empresa, para introducir dinero negro en el sistema financiero. En una situación como esta, si el auditor detectase movimientos sospechosos en alguna de las cuentas de la empresa, solicitaría una confirmación. De esta forma, tal y como dicta la NIA- ES 240, en el apartado 26²⁴: *“el auditor, basándose en la presunción de la existencia de riesgo de fraude en el reconocimiento de ingresos, deberá evaluar los diferentes tipos de ingresos que dan lugar a dicha presunción”*.

Según la NIA- ES 240 en su apartado A4, existen numerosas técnicas contables para eludir los controles de la auditoría, y cometer fraude. A continuación, encontramos las más relacionadas con el blanqueo de capitales, siendo las dos últimas las más habituales y en las que tendrá que poner un especial énfasis el auditor²⁵:

- *“Registro de asiento ficticios en el libro diario.*
- *Ajustes indebidos de algunas hipótesis cambiado los juicios en los que se basa la estimación de saldos contables.*
- *Omitiendo, anticipando o difiriendo el reconocimiento en los estados financieros de hechos y transacciones que han ocurrido durante el periodo.*
- *Ocultación o no revelación de hechos que podrían afectar a cantidades registradas en los estados financieros.*
- *Transacciones que no se registran de forma íntegra, o que se registran incorrectamente en lo referente a cantidad, periodo contable...*

²⁴ Véase NIA- ES 240.26 **Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude.**

²⁵ Véase NIA- ES 240.A4 **Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude.**

- *Realización de transacciones complejas estructuradas de forma que falseen la situación financiera o los resultados de la entidad.*
- *Alteración de los registros relativos a transacciones significativas e inusuales.*
- *Saldos o transacciones sin justificación documental.”*

Además, menciona también una serie de evidencia contradictorias, o falta de ellas, como, por ejemplo:

- Ausencia de documentos.
- Documentos que parecen haber sido alterados.
- Partidas de conciliación significativas no explicadas.
- Cambios inusuales en el balance de situación.
- Respuestas incongruentes, vagas, o poco verosímiles de la dirección o empleados en las indagaciones realizadas.
- Discrepancias inusuales entre los registros de la entidad y las respuestas de confirmación.
- Número elevado de abonos y otros ajustes realizados en las cuentas a cobrar.
- Desaparición de existencias o de activos físicos de magnitud significativa.

Y es que, siendo conscientes, que gran parte del capital a blanquear se hace mediante depósito de dinero en efectivo, las autoridades realizaron una modificación de pago en efectivo. En concreto, la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, en el artículo 7 establece que *“no podrán pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500€ ... el citado importe será de 15.000€ cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España”*.

Sin embargo, y una vez entendido el procedimiento de blanqueo, es necesario entender cuál es el proceso que el auditor tiene que seguir para detectar y rastrear “dinero negro”.

La circularización, o la confirmación de terceros es una de las herramientas más habituales en el ámbito de la auditoría. Se utilizan para confirmar la corrección o incorrección de los datos auditados. Es un pilar básico en el trabajo del auditor, ya que, la evidencia de auditoría obtenida es más fiable si se obtiene de fuentes externas a la entidad, o si se obtiene directamente del auditor ²⁶.

De esta forma, y a la hora de solicitar una confirmación, son dos las situaciones que se podrían dar. Por un lado, que la dirección de la empresa auditada deniegue el permiso de envío de la solicitud de confirmación a un tercero. Por otro lado, que la tercera parte, la parte confirmante no facilite la información solicitada o que dicha información no sea fiable.

En el primer caso, ante la negativa por parte de la dirección, el auditor deberá indagar sobre los motivos de dicha negativa. Según la NIA-ES 505²⁷, *“Uno de los motivos*

²⁶ Véase NIA- ES 500.A5 **Evidencia de auditoría**.

²⁷ Véase NIA- ES 505. **Confirmaciones externas**, A8.

más comunes que aducen las empresas, es la existencia de un contencioso o de una negociación en curso con la tercera empresa en cuestión, y cuya resolución puede verse afectada por una solicitud de confirmación". En primer lugar, el auditor, deberá evaluar la veracidad de tales afirmaciones, ya que, en caso de no justificarse adecuadamente, podría suponer un indicio de ocultación fraude.

En caso de considerar adecuada la negativa por parte de la dirección a la hora de facilitar la información solicitada, el auditor deberá buscar la evidencia de forma alternativa. Finalmente, y en caso de no poder obtener la evidencia necesaria para emitir su opinión, tendría que emitir un informe de auditoría con una opinión con salvedades o directamente denegará su opinión.

Y es que, cuando el auditor no puede aplicar uno o varios procedimientos de auditoría, o no pueden practicarse en su totalidad, nos encontraríamos con una limitación al alcance.

Dentro de estas limitaciones, encontramos las impuestas y las sobrevenidas. Las primeras, son las que provienen de la entidad auditada (como la negativa a enviar confirmaciones a terceros) y las segundas son las que vienen creadas por las circunstancias, y pueden tomarse por accidentales (como una accidental destrucción de documentación, etc.). Como ya hemos dicho, al encontrarse con una limitación al alcance, el auditor deberá decidir si emite una opinión con salvedades o directamente deniega su opinión.

La otra situación con la que nos podemos encontrar, es que el auditor solicite una confirmación a un tercero y este se la deniegue, o que la información que le facilite no sea muy fiable. En este caso, y con el objetivo tanto de asegurarse una respuesta, como de facilitar el trabajo a este tercero, el auditor tiene una serie de herramientas.

Por esta razón, existen solicitudes de confirmación positivas y negativas. En el primero, se le solicita al tercero en cuestión si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Un claro ejemplo, sería solicitarle a una entidad financiera si concuerdan el saldo que figuran en las cuentas de la empresa y en las de la entidad financiera. En el caso de las solicitudes de confirmación negativas, se invita a la parte confirmante a responder solo en caso de que la información enviada no sea correcta. Lo que se busca con este tipo de solicitudes, no es más que agilizar la tarea de la parte confirmante, y promover su respuesta, ya que, si dicha parte tuviese que realizar un trabajo adicional de comprobación de la información que se le solicita, probablemente no se recibiría una gran cantidad de confirmaciones.

Una vez enviadas estas confirmaciones, y en caso de que la respuesta recibida no fuese fiable a ojos del auditor, este trataría de obtener la evidencia de forma alternativa.

No obstante, tal y como establece la NIA- ES 500²⁸ *“una respuesta no fiable podría indicar la existencia de un factor de riesgo de fraude que requiera ser valorado”*. Por otro lado, una falta de contestación, obligaría al auditor a buscar evidencia de forma alternativa.

²⁸ NIA-ES 500. **Confirmaciones externas**, A17

En ambos casos, y bajo el supuesto de no conseguir la información necesaria, nos encontraríamos con una limitación al alcance. Ante esta situación, el auditor valorará de nuevo la emisión de una opinión con salvedades o una denegación de opinión.

Actualmente, y pese a ser el auditor un sujeto obligado, la Ley 10/2010 no dota a este de ningún tipo de potestad ni herramienta para poder solicitar ningún tipo de información, por lo tanto, ante la negativa de alguna de las partes para facilitar información este tiene las manos atadas. Podría decirse, que su actuación sería pasiva, es decir, en caso de no tener la documentación suficiente para realizar su tarea, la única posibilidad que tiene el auditor sería la de denegar su opinión.

De esta forma, el auditor podría toparse con una contradicción. Por un lado, según establece la Ley 10 /2010 en el artículo 48: *“Toda autoridad o funcionario que descubra hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, ya sea durante las inspecciones efectuadas a las entidades objeto de supervisión, o de cualquier otro modo, deberá informar de ello al Servicio Ejecutivo de la Comisión.”*

La legislación, deja claro que, en caso de detectar cualquier irregularidad durante la realización de su tarea, deberá notificárselo a las autoridades. No obstante, si no dispone de la información necesaria, no podría determinar la posible existencia de un fraude. Es decir, si la empresa auditada no proporciona la información que el auditor necesita, este no puede realizar su trabajo. La ausencia de esta documentación, puede indicar la existencia de fraude, pero no necesariamente. No obstante, si no tiene información suficiente, no puede obtener indicios de fraude, y tan solo podría denegar su opinión. Por lo tanto, podemos ver como la Ley no dota de las herramientas necesarias al auditor para la detección de fraudes.

Generalmente, este tipo de situaciones (en las que el auditor tiene problemas para obtener información) pueden estar relacionadas con la ocultación de algún tipo de fraude por parte de la empresa. Y es que, a todas luces resulta evidente que, el blanqueo de dinero, o más concretamente su detección es realmente complicada para el trabajo del auditor. Además, debido a las limitaciones que la Ley 10/2010 tiene en este ámbito, esta tarea se convierte en harto difícil.

Tal y como hemos explicado anteriormente, en muchas ocasiones el blanqueo de capitales se lleva a cabo mediante la utilización de entidades financieras extranjeras. Este hecho, provoca una gran dificultad de rastreo, ya que, generalmente las entidades bancarias que participan en este tipo de actividades no tienen ningún tipo de obligación de responder a las solicitudes de información que les hacen los auditores. Ante esta situación el auditor se encuentra con las manos atadas. En numerosas ocasiones, la opacidad bancaria se convierte en un muro infranqueable para este.

Solo en caso de obtener una evidencia muy clara de actividades ilícitas, como la de blanqueo de capitales, el auditor podría vulnerar el deber de secreto profesional, y poner en conocimiento de las autoridades estos hechos. Para ello, se pondría en contacto

con la UIF²⁹ quien a su vez investigaría los hechos. Así lo determina la Ley 10/2010 de 28 de abril, tal y como hemos mencionado antes.

Siguiendo con las herramientas que proporciona la Ley 10/2010, en el artículo 48 bis, *“El intercambio de información del Servicio Ejecutivo de la Comisión con Unidades de Inteligencia Financiera de Estados de la Unión Europea se realizará de conformidad a lo dispuesto en los artículos 51 a 57 de la Directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”*. En este caso, estaríamos hablando del tipo de comunicaciones que se podrían establecer entre países miembros de la Unión Europea. Así, la Ley 10/2010, deja claro, que todo lo relativo a la posibilidad de exigir información (intercambio de información entre países miembros) está redactado en la Directiva 2015/849.

En concreto, los artículos que menciona la Ley 10/2010, se refieren a la coordinación y colaboración entre las UIF de cada estado miembro, para el intercambio de información para los casos en los que se haya podido incurrir en algún delito de carácter financiero. Concretamente, según dice la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo. Art. 53.1 y 53.3, *“Los Estados miembros velarán por que las UIF intercambien, por propia iniciativa o previa solicitud, toda la información que pueda ser pertinente para el tratamiento o el análisis de información por parte de las UIF, relacionada con el blanqueo de capitales...y sobre las personas físicas o jurídicas...”* Sin embargo, tal y como analizaremos a continuación, existen circunstancias que permiten negarse a una UIF intercambiar información con otra, dificultando la labor de las autoridades y de los auditores, *“Una UIF podrá negarse a intercambiar información solo en circunstancias excepcionales en que el intercambio pudiera ser contrario a principios fundamentales del Derecho Nacional...”*

No hay mejor forma para ilustrar esta situación, que la utilización de un caso real. En 2013, una sentencia³⁰ del TJUE³¹. En este caso, el tribunal europeo, daba la razón a España en el conflicto que le enfrentaba a una entidad financiera gibraltareña, Jyske Bank Ltd.³². Jyske, es una filial del banco danés NS Jyske Bank. Esta, es una entidad de crédito, establecida en Gibraltar, pero que opera en España.

Concretamente, en enero de 2007, la UIF española, solicitó cierta información a esta entidad, bajo la sospecha de que algunos de sus clientes estaban cometiendo blanqueo de capitales. Las sospechas de la UIF, giraban en torno a la creación de una serie de estructuras societarias para la adquisición de bienes inmuebles en territorio español. El problema radicaba en la imposibilidad por parte de las autoridades de conocer quien estaba comprando estos bienes.

La siguiente tabla muestra, el número de solicitudes de información recibidas por parte de las autoridades españolas, y las solicitudes enviadas a otras UIF. De esta forma, podemos observar la cooperación existente entre distintas administraciones para combatir

²⁹ Unidad de Inteligencia Financiera.

³⁰ Véase **Sentencia del TJUE de 25 de abril de 2013**, C-212/11, sala tercera.

³¹ Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

³² Jyske en adelante.

el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Y es que, no es poca la cantidad de información que intercambian las diferentes UIFs. Vemos también, la evolución positiva en relación tanto a las solicitudes de información recibidas como solicitadas. Pese a la posible existencia de distintas variables que pudieran afectar a este incremento, lo lógico, sería pensar que la colaboración entre las UIF de los distintos territorios tiene un crecimiento positivo.

| | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|------|------|
| Solicitudes de información de UIFs | 609 | 698 |
| Solicitudes de información a UIFs | 166 | 319 |

Tabla 3: Intercambios internacionales de información³³

Ante esta situación, Jyske hizo entrega de parte de la información solicitada por España, salvo la relativa a las identidades de sus clientes, ni tampoco la relativa a las transacciones que habían sido consideradas sospechosas por las autoridades nacionales.

De esta manera, entraron en conflicto las normativas de ambos territorios, y se inició un procedimiento judicial.

Por un lado, encontramos la normativa española, que establece que cualquier entidad de crédito que opere en su territorio, tiene la obligación de notificar a la UIF cualquier información que esta considere relevante. Esta norma, también se aplica a entidades que pese a no estar establecida en España operan dentro de su territorio.

Sin embargo, por otro lado, Jyske argumenta que la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo tan solo le obliga a informar a la UIF de Gibraltar, y que por lo tanto la petición de la UIF española era excesiva.

Finalmente, y en un proceso que se ha alargado durante 5 años, el TJUE dio la razón a España, y establecía la obligación de facilitar la información que requerida a la entidad financiera que operaba en Gibraltar.

Sin embargo, mediante el análisis de este caso, queda de manifiesto, las dificultades con las que se encuentran en primer lugar los auditores, y a continuación las propias autoridades para el rastreo y seguimiento del blanqueo de capitales.

Como podemos observar, en caso de tener sospechas sobre blanqueo de capitales, o algún tipo de actividad fraudulenta, el procedimiento que habría que llevar a cabo para poder demostrarlo y sancionarlo es extremadamente largo y complicado.

En primer lugar, si el auditor detectase algo sospechoso, mediante la aplicación de los procedimientos arriba explicados como la circularización, este tendría que determinar si los indicios encontrados serían suficientes para denunciarlo a las autoridades. Aquí, el auditor encontraría su primera limitación, ya que, pese a que tal y como hemos visto la Ley le obliga a denunciar tales hechos, el auditor tendría que tener la seguridad suficiente de que efectivamente podría existir algún tipo de fraude. En esta

³³ Fuente: **SEPBLAC. Unidad de Inteligencia Financiera**, actividad 2018.

situación, nos encontramos ante una contradicción, ya que, la falta de acceso a información podría considerarse un signo de fraude, o no.

De esta forma, el auditor podría vulnerar su deber de secreto profesional, en caso de tener indicios evidentes de la comisión de un fraude, no obstante, la ausencia de información dificulta enormemente el hecho de determinar la existencia o no de indicios de fraude.

En caso de denunciar la posible comisión de un fraude a las autoridades, tal y como hemos visto en el Caso Jaksy, el procedimiento puede extenderse durante varios años. En el ejemplo, vemos como la UIF solicitó información sobre ciertos clientes y ciertas transacciones a la entidad bancaria en cuestión. Tras su negativa, y el inicio del procedimiento judicial, transcurrieron 6 años hasta que el TJUE emitió su sentencia.

Por otro lado, es de suponer que la citada entidad bancaria precedería a dilatar lo máximo posible la entrega de la información solicitada. Al fin y al cabo, pese a que existe un mandato judicial que le obliga a entregar dicha información, Jaksy trataría de proteger los intereses de sus clientes al máximo posible.

Por lo tanto, resulta evidente, que este tipo de procedimientos se dilatan enormemente en el tiempo, por lo que el trabajo del auditor se dificulta de manera manifiesta.

De esta forma, podemos observar, como el blanqueo de capitales dificulta y limita mucho el trabajo del auditor.

En el siguiente cuadro, podemos observar el número de comunicaciones que la UIF recibió a lo largo de 2017 y 2018. Se trata, de comunicaciones que este organismo recibe, cuando los sujetos obligados detectan o tienen indicios de algún tipo de fraude relacionado con el blanqueo de capital o la financiación del terrorismo, tal y como la Ley 10/2010 establece.

Llama la atención, el escaso número de notificaciones realizadas por los auditores de cuentas, tan solo 9 en 2017 y 12 en 2018. Pese a que estos datos no permiten obtener opiniones muy concluyentes, el bajo número de comunicaciones puede deberse a dos razones.

| | 2017 | 2018 |
|---|------|------|
| SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS | | |
| Notarios | 383 | 326 |
| Registradores de la propiedad | 158 | 206 |
| Abogados | 24 | 17 |
| Audidores, contables y/o asesores fiscales | 9 | 12 |
| Casinos de juego | 18 | 17 |
| Promoción inmobiliaria | 44 | 51 |
| Comercio de joyas o metales preciosos | 6 | 3 |
| Arte o antigüedades | 1 | 1 |
| Transporte profesional de fondos | 49 | 31 |
| Comercio de bienes | 0 | 3 |
| Servicios postales | 9 | 4 |
| Loterías u otros juegos de azar | 98 | 91 |
| Intermediación en concesión de préstamos o créditos | 2 | 0 |

Tabla 4: Comunicaciones por indicio sujetos obligados no financieros, párrafos j) a y) de la Ley 10/2010³⁴

En primer lugar, el auditor de cuentas, necesita la información en un relativo corto plazo. Es decir, tanto la formulación de las cuentas anuales, redacción del informe de auditoría y aprobación de dichas cuentas por parte de la junta están sujetas a unos plazos que hay que cumplir.

Así, la formulación de las cuentas anuales, por parte de los administradores de la entidad, debe realizarse en un periodo no superior a 3 meses desde el cierre del ejercicio. El siguiente paso, sería el de la redacción del informe de auditoría. Formalmente, el auditor cuenta con al menos un mes para la realización de su trabajo, desde el momento en el que se le entregan las cuentas anuales. Tal y como dice la Ley 22/2015 en el artículo 5, *“La fecha del informe de auditoría será aquella en que el auditor de cuentas y la sociedad de auditoría han completado los procedimientos de auditoría para formarse una opinión sobre las cuentas anuales”*.

Como podemos ver, la Ley es un poco ambigua en este aspecto, ya que no determina un máximo de tiempo para el auditor. No obstante, y teniendo en cuenta, que las cuentas anuales deben ser aprobadas en los primeros 6 meses posteriores al cierre del ejercicio, los plazos para el trabajo del auditor quedan más acotados.

Por lo tanto, y volviendo a la búsqueda de las razones de por qué los auditores de cuentas realizan tan pocas comunicaciones de posibles blanqueos de capitales a las autoridades, podemos afirmar que debido a los cortos plazos en los que se mueven durante la realización de su trabajo pueden tener un efecto importante. Y es que, en caso de que un auditor tuviese indicios muy claros de la existencia de un fraude, es evidente que lo notificaría a las autoridades correspondientes. No obstante, en caso de que la ausencia de datos o documentación, le llevase a intuir la existencia de algún tipo de fraude, el mero

³⁴ Fuente: SEPBLAC. Unidad de Inteligencia Financiera, actividad 2018.

hecho de investigarlo a fondo podría agotar el plazo para la presentación de su informe de auditoría.

En segundo lugar, ciertamente resulta más “cómodo” para un auditor denegar la opinión en un informe. Sin ánimo de dudar de la profesionalidad de nadie, es cierto, que el rastreo de activos procedentes del blanqueo de capitales es realmente complicado. La realización de indagaciones, para la determinación de la existencia de un fraude, alargaría su trabajo. De esta forma, la denegación de la opinión, debido a una ausencia manifiesta de información resultaría menos trabajoso para el profesional encargado de la auditoría.

Responsabilidad del auditor

Tal y como he explicado anteriormente, la responsabilidad directa del auditor a la hora de revisar unos estados financieros es la emisión de una opinión sobre la veracidad de dichas cuentas, y sobre si se han realizado con arreglo a los criterios y normas establecidos. Por lo tanto, no es trabajo del auditor la detección de errores en dichas cuentas, salvo que puedan llevar a manifestar una imagen que no se ajusta a la realidad.

No obstante, el auditor es responsable de la opinión que emite, y por lo tanto en caso de la emisión de una opinión favorable sobre unas cuentas anuales con algún error material, o realizadas en fraude de Ley, el auditor deberá responder por ello.

Teniendo presente la importancia social y económica que la auditoría de cuentas adquiere en la actualidad, es necesario el establecimiento de un código de actuación en este ámbito. Es la NIA-ES 240³⁵ la que trata sobre las responsabilidad y obligaciones del auditor en esta materia.

Debido a los escándalos protagonizados por grandes corporaciones en los últimos años, se puso de relieve la necesidad de actualizar y modificar los códigos éticos que regían la profesión de la auditoría, y que han permanecido inalterados durante décadas. De esta forma, nos centraremos en el Código de Ética del ICJCE³⁶, que está basado en el Código de Ética del IFAC³⁷, ya que a falta de desarrollo legal ha cubierto el hueco necesario dentro de la actividad profesional hasta la actualidad.

Pese a no tener la intención de profundizar en exceso en este documento, cabe subrayar el concepto de *marco de referencia conceptual*. En este apartado, menciona el hecho de que *“las circunstancias en las que los profesionales de la auditoría desarrollan su actividad pueden dar origen a amenazas concretas en relación con el cumplimiento de los principios éticos fundamentales. Resulta imposible definir la totalidad de las situaciones que puede originar tales amenazas, y concretar las actuaciones que pudieran mitigar las mismas”*³⁸. Esta afirmación, viene a reforzar la tesis que se defiende aquí y es

³⁵ Véase **NIA -ES 240 Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude**.

³⁶ Instituto de censores Jurados de Cuentas de España.

³⁷ International Federation of Accountants.

³⁸ Véase Código de Ética de ICJCE (2008).

que, a lo largo de la labor de la auditoría, la casuística es infinitamente extensa, y por lo tanto en algunas ocasiones la labor de auditoría es tremendamente complicada.

Posteriormente, se desarrollan los principios éticos fundamentales que debe cumplir el profesional de la auditoría en el desarrollo de su trabajo, como son la integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, profesionalidad y, por último, secreto profesional.

En este último principio, se establece una serie de normas sobre la revelación de información confidencial en las que merece la pena profundizar. Tal y como establece la RAE³⁹ el secreto profesional es “*el secreto conocido con ocasión del ejercicio de una profesión.*” y la Ley establece penas de prisión de uno a cuatro años o la inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, art. 199.2). En relación a esto, el Código de Ética del ICJCE, establece la prohibición de: “*Revelar información confidencial obtenida en sus relaciones profesional... a menos que exista un deber legal que lo exija*”⁴⁰.

Así, se establecen una serie de supuestos en los que el auditor podrá revelar información confidencial sin perjuicio. En general para situaciones relacionadas con infracciones de la normativa, o procedimientos judiciales.

En lo que respecta a la responsabilidad del auditor, es importante mencionar la gran importancia que tiene la labor de la auditoría en la economía, ya que es una herramienta imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema económico. Y es que, la labor de la auditoría se sustenta en el hecho de que el informe que emite un auditor tiene un importante efecto en terceras personas. Debido a esto, los trabajos de auditoría tienen que cumplir unos mínimos de calidad. Además, en caso de no ser así, debe de existir una normativa que delimite la responsabilidad, así como las consecuencias para el auditor en estos supuestos.

La normativa comunitaria, establece que los auditores y sociedades de auditoría deberán responder de los perjuicios financieros provocados por su negligencia. Esto ha provocado numerosas discusiones, ya que, entre otras cosas puede impedir o dificultar la posibilidad de obtener una cobertura de seguro de responsabilidad profesional a este colectivo.

Debido a esto, la Comisión Europea trató de regular esta situación mediante la publicación de la Recomendación de la Comisión, de 5 de junio de 2008, sobre la limitación de la responsabilidad civil de los auditores legales y las sociedades de auditoría. Las ideas principales que se pueden obtener de ella, son que la responsabilidad civil a la que tendrán que hacer frente los auditores deberá ser limitada excepto en los casos en los que haya sido intencionada. En referencia a este concepto, y de cara a establecer el punto en el que un auditor puede o no ser responsable, existe un modelo de responsabilidad que según por el profesor Carlos Mir Fernández, está constituido por 5 elementos⁴¹:

³⁹ Real Academia Española.

⁴⁰ Véase **Código de Ética de ICJCE** (2008).

⁴¹ Véase **Carlos MIR FERNÁNDEZ**, “*MANUAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO*”.

- *“Responsabilidad ética del auditor. Relacionado con una prestación de servicios de calidad y en conjunción a las normas establecidas.*
- *Responsabilidad social del auditor, provoca por la transcendencia social del trabajo de este.*
- *Responsabilidad administrativa del auditor, ejercida por el ICAC:*
- *Responsabilidad civil del auditor, relacionado con lo arriba mencionado.*
- *Responsabilidad penal del auditor, originada por infracciones graves como falsificación de documentos, incumplimiento del secreto profesional, etc.”*

Existen diferentes tipos de sanciones, en función del tipo de infracción cometida, que se clasifican en leves, graves y muy graves. Dentro de estas últimas, el listado es muy extenso, no obstante, en relación con el tema que se trata aquí, considero la más importante la relativa al secreto profesional. Además, independientemente de las sanciones por la vía penal, el ICAC⁴² que ostenta la potestad sancionadora, podría aplicar cualquiera de esas tres sanciones:

- Retirada o revocación de la autorización en el ROAC⁴³.
- Suspensión de la autorización y baja temporal de 2 a 5 años en el ROAC.
- Multas económicas, que en ningún caso podrías ser inferiores a 18.001€ ni superiores a 36.000€.

Y es que, tal y como he explicado con anterioridad el auditor tiene el deber de mantener el secreto profesional, pudiendo ser condenado incluso a penas de cárcel en caso de incumplirlo. No obstante, y tal y como figura en el Código de la Ética del ICJCE, existen una serie de supuestos en los que un auditor podría incumplir este principio sin cometer una infracción.

No obstante, y en el caso de detectar fraude en las cuentas de la empresa auditada, para poder vulnerar el secreto profesional primeramente el auditor deberá realizar una serie de acciones.

En caso de obtener evidencia de la posible existencia de fraude, el auditor deberá poner este hecho en conocimiento de la dirección tan pronto como sea posible. Será potestad de este, determinar a qué nivel directivo se lo notificará, ya que, la comisión de dicho fraude puede corresponder tanto a un trabajador de un nivel inferior como a la más alta dirección. En el caso de que el auditor dude de la honestidad y de la implicación de la dirección en el fraude se encontraría en una situación complicada, ya que, para poner denunciar la situación estaría faltando a su deber de secreto profesional.

Ante esta situación, el auditor podría considerar la obtención de asesoramiento jurídico para poder determinar su actuación. Y es que, las responsabilidades legales del auditor varían de un país a otro, y en algunas situaciones el deber de confidencialidad puede quedar invalidado por la normativa legal o los tribunales de justicia⁴⁴.

⁴² Instituto de Censores Jurados de Cuentas.

⁴³ Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

⁴⁴ Véase **NIA-ES 240. A65. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude.**

Caso Real

Una de las formas de poder entender, e interiorizar toda la información esta información es mediante su aplicación a la vida real. El trabajo del auditor, tiene una gran relevancia a nivel social, ya que, su opinión acerca de unas cuentas anuales es de utilidad para su público interesado. Tanto, posibles inversores, como clientes, proveedores o incluso los propios trabajadores pueden dirigir sus actuaciones, y por ende reciben la influencia sobre la auditoría de las cuentas anuales de una empresa. Además, las entidades de interés público, así como empresas que coticen en el mercado de valores deben realizar auditoría de sus cuentas de forma que las autoridades puedan fiscalizar sus actividades, de cara a evitar grandes fraudes.

Para ello, creo importante mencionar algunos casos reales en los que tanto empresas, auditores y autoridades se han visto involucradas en los últimos años. Y es que, son sobradamente conocidos para el público en general, escándalos financieros como el que sucedió con ENRON. Revelado en 2001, supuso la bancarrota más grande de la historia económica de los Estados Unidos de América. Además, provocó también la desaparición de Andrew Andersen, una de las sociedades de auditoría más grandes del mundo. Dicha desaparición se debió a que la firma de auditoría aceptó presiones por parte de la empresa para ocultar la información fraudulenta de las cuentas.

Sin embargo, tenemos casos similares, en nuestras propias fronteras, el CASO BANKIA entre otros muchos. La elección de este caso en particular se debe a varias razones. Por un lado, fue un caso extremadamente mediático, debido a las implicaciones económicas y sociales tuvo la bancarrota y el posterior rescate de Bankia. Por otro lado, sirve para escenificar las limitaciones con las que los auditores se encontraron para la realización de su trabajo, o eso fue al menos lo que argumentaron. La falta de información recibida por parte de la empresa le impidió llevar a cabo su labor, o eso es lo que sostenía el responsable de la auditoría. Posteriormente, la propia empresa de auditoría fue condenada, ya que, se demostró una grave falta de independencia en su trabajo.

He decidido exponer este caso, ya que, tiene una gran relevancia social en España. Por un lado, se pone de manifiesto como las limitaciones de acceso a información o documentación de carácter relevante, pueden impedir el trabajo de los auditores. Además, mediante este caso se subraya la gran relevancia que tiene la labor de la auditoría a nivel social. Para todos es sabido, que el correcto funcionamiento de las entidades financieras, es vital para la buena marcha de un país. Por ello, la fiscalización y revisión de sus actividades es absolutamente necesaria.

El Caso Bankia, marcó un antes y un después en la percepción de la ciudadanía respecto a las entidades bancarias. Así, a medida que la investigación avanzaba, quedaron de manifiesto los excesos e imprudencias con los que los administradores de estas entidades gestionaron el patrimonio de cientos de miles de ciudadanos. De esta forma, pretendo demostrar la gran importancia que tiene la labor de la auditoría, y como debido a las limitaciones con las que se encuentra un auditor en su día a día, la realización de su trabajo es muy dificultosa.

El siguiente proceso judicial es muy extenso, y tal y como veremos, la propia firma de auditoría no está exenta de culpa. No obstante, trataremos de aislar la falta de independencia con la que la firma de auditoría llevo a cabo su labor, centrándonos en las limitaciones con las que se encontró está a la hora de realizar su tarea.

EL CASO BANKIA

Este caso, que protagonizó las portadas de la prensa española durante los años más duros de las crisis del 2008, provocó un duro golpe a la imagen que la ciudadanía percibía tanto de entidades financieras como de firmas de auditoría. De hecho, la falsificación de datos contables por parte de la entidad, y su posterior quiebra, escenificó los excesos que las entidades financieras habían llevado a cabo durante los últimos años, y que provocó la tan famosa crisis de 2008. Como todos sabemos, la quiebra de Bankia termino con un controvertido rescate por parte de las autoridades públicas.

De una manera superficial, y para poder contextualizar este caso, es necesario entender que es Bankia. Bankia, es una entidad financiera surgida en 2010 después de la fusión de siete cajas de ahorro⁴⁵. Inmersos en plena crisis económica y financiera, las autoridades europeas decidieron obligar a los países miembro a reestructurar sus sistemas financieros. Entre otras cosas, se obligaba a las entidades bancarias a crear una reserva de capital a modo de provisión para poder hacer frente a eventuales problemas.

Esta nueva entidad creada, Bankia, no tenía liquidez suficiente para hacer frente a esta situación por lo que decidió emitir valores en bolsa para poder obtener el capital necesario. No obstante, al igual que sucedía con una gran parte de las entidades financieras en el estado español, la fusión resultante de estas siete cajas de ahorro tenía una gran cantidad de activos procedentes del sector de la construcción. La dirección de la entidad, falseo documentos para poder realizar su salida a bolsa, ya que su situación financiera real era muy precaria.

El resultado final de esta situación es de sobra conocido para todos, y es que, debido a la incapacidad para hacer frente a sus obligaciones, Bankia tuvo que ser rescatada por el gobierno. Se calcula, que el estado tuvo que destinar alrededor de 23.000 millones de euros para poder regularizar su situación. Posteriormente, comenzó un proceso judicial para depurar responsabilidades en el que se vieron inmersos tanto los antiguos dirigentes de la entidad como la firma de auditoría responsable de auditar sus cuentas.

Resulta un caso interesante, ya que, en este caso la firma de auditoría Deloitte⁴⁶ se vio envuelta en la polémica. De hecho, fue imputada en el proceso judicial que se llevó a cabo, siendo acusada de participar en el falseamiento de las cuentas de la entidadⁱⁱ. Según la acusación, Deloitte había contribuido al falseamiento de las cuentas, ya que, aprobó sin salvedades las cuentas anuales de la entidad financiera.

⁴⁵ Bankia fue el resultado de la fusión de 7 cajas de ahorro: Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

⁴⁶ Deloitte Touche Tohmatsu Limited es la firma privada número uno de servicios profesionales del mundo, por volumen de facturación, es una de las llamadas Cuatro Grandes Auditoras (Big Four), junto a PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG.

Pese a que no es el objetivo de este trabajo ahondar en la posible culpabilidad o inocencia de tanto de Bankia como de Deloitte, quiero incidir por un lado en el argumento de defensa que utilizó la firma de auditoría, y por otro lado en cuál es el procedimiento que tenía que haber seguido esta, ya que están ínfimamente relacionados con el tema que aquí se trata.

Para argumentar su defensa, Deloitte argumentó que debido a una limitación al alcance (de la que ya hemos hablado anteriormente) no pudo presentar el borrador del informe de auditoríaⁱⁱⁱ. Según defendió Francisco Celma⁴⁷, debido a la falta de documentación relativa a inversiones inmobiliarias y otros aspectos, de gran relevancia para la realización de su labor, no pudo llevar a cabo su tarea. Tal y como figura en las NIA-ES, el propio Francisco Celma solicitó por escrito este tipo de documentación. Además, y según podemos desprender de su declaración ante el juez, Francisco Celma informo en repetidas ocasiones de la precaria situación económica de la entidad a su dirección.

Este procedimiento judicial, ha sido muy extenso y complejo. Además, una de las acusaciones que se le hacía a Deloitte, y por la que el propio ICAC sancionó a la firma fue la falta de independencia con la que actuó la propia consultoría, ya que mientras que por un lado colaboró en la reformulación de las cuentas de Bankia, por el otro realizó la auditoría de esas cuentas. Finalmente, ICAC acabó sancionando a Deloitte por estos hechos.

No obstante, tal y como he mencionado, no es objetivo de este trabajo el análisis de este proceso judicial. Centrándonos en el aspecto de las limitaciones con las que puede encontrarse un auditor en su trabajo, este caso resulta de gran interés. Aislando el hecho de que la propia firma haya actuado conforme a las normas de independencia o no, cabe resaltar el hecho de que el trabajo de auditoría se encuentra ante limitaciones que impiden su desarrollo. En este caso, tal y como denuncia el propio Francisco Celma, la falta de información o documentación relativa a un aspecto tan importante en las cuentas de una entidad como es el de las inversiones inmobiliarias, limita absolutamente la posibilidad de analizar las cuentas. Y es que, en el caso concreto de Bankia, cuya estructura económica se sustenta en la titularidad de una gran cantidad de activos inmobiliarios, la importancia de este tipo de información es vital.

Como podemos ver, al igual que hemos explicado anteriormente, en los casos de blanqueo, el auditor suele encontrarse con este tipo de limitaciones numerosas veces. Es decir, al hecho de no disponer de toda la información que es necesaria para llevar a cabo su tarea, al igual que argumentaba la firma de auditoría que auditó las cuentas de Bankia.

Una vez analizado este caso, nos viene a la cabeza la siguiente cuestión. Suponiendo que la firma de auditoría estaba actuando conforme a las normas, ¿En caso de haber dispuesto de la documentación de la carecía, podría haber evitado el rescate de Bankia? ¿Debería existir algún tipo de herramienta, para que el auditor tenga la potestad de exigir cierto tipo de información sin que la empresa auditada se la niegue?

De esta manera, podemos concluir que existen dos grandes limitaciones, que dificultan en gran medida el trabajo del auditor. Por un lado, nos encontramos con las

⁴⁷ Socio auditor de Deloitte.

limitaciones derivadas de la propia labor de auditoría, originadas por la ingente cantidad de datos que debe procesar en su trabajo diario. Esta situación, puede provocar que el auditor pase por alto evidencias que no debería, y podría acarrearle consecuencias, como podría ser una sanción. Por otro lado, la falta de acceso a cierta información, que puede resultar relevante provoca grandes dificultades en sus tareas. Además, teniendo en cuenta, que en numerosas ocasiones esta información de carácter relevante proviene de entidades de fuera de España, la dificultad de obtenerla crece de forma manifiesta.

DISCUSION Y ANALISIS

A la hora de estructurar este trabajo, he dividido las limitaciones que un auditor tiene a la hora de realizar su tarea en dos tipos. Por un lado, encontramos las limitaciones que la propia labor de la auditoría provoca. Este tipo de limitaciones, que podrían calificarse de más humanas, ya que, son las inherentes a la profesión de auditoría. Por ejemplo, el hecho de que un auditor, pase por alto un error pese a que haya aplicado correctamente el procedimiento de auditoría es algo prácticamente inevitable. Si, además, le añadimos el hecho de que en los casos en los que existe algún tipo de actividad fraudulenta, como puede ser el blanqueo de capitales, los responsables de estos fraudes tratarán de ocultarlo de cualquier forma, la probabilidad de detección de estos se reduce de forma manifiesta. Debido a esto, las posibles soluciones a este tipo de limitaciones no figuran en la Ley 10/2010, sobre la que pivota este trabajo. No obstante, haremos ciertas propuestas, con la idea de que se reduzcan las probabilidades de no detección del blanqueo de capitales.

Por otro lado, hemos descrito, las limitaciones de acceso a la información y documentación pertinente con las que se encuentran los auditores, y que provocan en algunas ocasiones la imposibilidad de emitir una valoración acerca de las cuentas que están analizando. Además, esta falta de información, que en muchas ocasiones está relacionada con la ocultación de algún tipo de fraude, puede provocar que el auditor no llegue a detectarlo. Las actuaciones que giran en torno a este tipo de limitación, están mucho más reguladas que las referentes al otro tipo de limitación. No obstante, y una vez habiendo profundizado en ella, he considerado una serie de propuestas, que podrían facilitar la actuación del auditor en la detección de fraudes y de blanqueo de dinero.

Obviamente, algunas de las soluciones propuestas, hacen referencia a el marco normativo comunitario, ya que, la Ley 10/2010 tiene una fuerte influencia comunitaria, como es lógico.

En lo que respecta a la primera limitación, podríamos considerar que existe una mayor probabilidad de un error humano por parte del auditor. Ya hemos mencionado, la inmensa cantidad de datos que tiene que procesar un auditor a la hora de realizar su tarea. Como es evidente, resulta del todo imposible que este haga frente a todos y cada uno de los movimientos contables, por lo que la utilización de métodos como el muestreo es algo muy habitual.

Sin embargo, es posible que a veces el auditor pase por alto algún tipo de error o fraude en las cuentas. Mas si cabe, en casos en los que los propios administradores de la entidad ponen todos sus medios para ocultarlo, como pudimos ver el Caso de Oxiebro. La única solución plausible, para una limitación como esta, es la de la contratación de un mayor número de auditores. Y es que, la cantidad de datos que podría abarcar un mayor número de profesionales, reduce ampliamente la probabilidad de existencia de errores de detección.

Sin embargo, esta solución tiene una limitación muy evidente, y es de carácter económico. Resulta obvio, que, a mayor número de auditores, la propia auditoría tendrá un mayor coste. Por esta, y otras razones que expondré, considero que lo más conveniente

sería la contratación por parte del estado de los auditores. Podría regularse tanto en la Ley 22/2015 como en la Ley 10/2010, la inclusión de los auditores en la función pública.

Otra de las razones, para que esta profesión este amparada bajo el paraguas del Estado, es la de los conflictos de intereses. Como hemos visto, muchas firmas de auditoría, realizan trabajos de consultoría, por lo que, puede darse el caso de que la misma auditoría que le ha formulado las cuentas anuales a una empresa, sea la encargada de auditarlas. Resulta obvio, que, en situaciones como esta, el riesgo de que se produzcan conflictos de intereses es muy alto.

Es cierto, que existe un código de ética, que rige las actuaciones de los auditores, no obstante, el riesgo de que el alcance del código ético no sea suficiente es muy amplio. En el Caso Bankia que hemos expuesto anteriormente, se produce esta situación. Por esta razón, mi propuesta de convertir a los auditores en funcionarios del Estado, de esta manera se evitarían este tipo de situaciones de conflictos de intereses. Así, las firmas de auditoría que ofrecen ambos servicios (consultoría y auditoría) podrían seguir ofreciendo servicios de consultoría, y el trabajo de auditoría quedaría bajo la responsabilidad del Estado.

No obstante, y bajo la premisa de la gran oposición que puede despertar el hecho de que los auditores se conviertan en trabajadores públicos, a modo de alternativa considero que las normas de independencia deberían de ser mucho más rígidas. De esta forma, la legislación debería de establecer la prohibición de que una misma empresa realice labores de consultoría de auditoría al mismo cliente.

Otro de los argumentos, que refuerzan mi tesis acerca de la transformación de la profesión de la auditoría gira de nuevo, en torno a la independencia de estos. Y es que resulta ciertamente contradictorio, que sea la empresa auditada quien abone los honorarios de los auditores. De esta forma, aquel que es el encargado de detectar un posible fraude en las cuentas de una empresa, recibe el salario de esta misma empresa. Esto resulta una contradicción en sí misma, y puede restar capacidad al auditor a la hora de denunciar ciertos hechos.

Una vez más, existe una alternativa para evitar que se produzca esta situación, sin la necesidad de que los auditores se conviertan en trabajadores del Estado. En este caso, consistiría en establecer un impuesto adicional a las empresas, con el montante del coste de la auditoría anual. De esta forma, sería un organismo público, quien recaudaría este tributo, y lo abonaría al auditor correspondiente. Así, conseguiríamos evitar la posible existencia de un conflicto de intereses.

Las empresas, seguirían abonando el importe correspondiente a el coste de una auditoría, pero se lo entregaría directamente a las autoridades quienes se encargarían del reparto de estas cantidades. De esta forma, las entidades obligadas a auditar sus cuentas, no sufrirían ningún perjuicio.

Por lo tanto, podemos observar que hay diferentes soluciones. La más global, es la que provocaría que la profesión de auditoría en España estuviese amparada bajo el paraguas del Estado. De esta forma, eliminaríamos posibles conflictos como el de

intereses o independencia. En 2019, había 3.997 auditores inscritos en el ROAC⁴⁸, por lo que es coste económico de contratación no resultaría excesivamente elevado, si tenemos en cuenta que en su gran mayoría podría financiarse con el establecimiento de un “impuesto de auditoría” a las empresas que están obligadas a auditar sus cuentas.

Sin embargo, y siendo consciente de la dificultad que entraña tamaña transformación tan radical de un sector con una gran relevancia en el funcionamiento de un país, las soluciones parciales propuestas podrían solucionar algunos de los problemas que hemos mencionado.

De esta forma, considero que la Ley 10/2010, debería de prohibir expresamente que una misma consultoría pueda ofrecer sus servicios de consultoría y de auditoría a la misma empresa.

Resulta evidente, que pese a que el Código de la Ética del IFAC, como los manuales de actuación y las NIA-ES regulan ampliamente el trabajo del auditor, algunos aspectos relativos a su trabajo deberían de regularse más expresamente mediante la Ley. Por esta razón, considero, que prohibiciones como la anteriormente expuesta, deberían quedar reflejadas en la Ley 10/2010. Generalmente, las grandes empresas podrían utilizar la falta de independencia que puede generar esta situación, para ocultar fraudes y blanqueo de capitales, por eso opino que debe reflejarse en la Ley 10/2010 y no en la 22/2015.

En relación al segundo tipo de limitaciones, a las que vienen provocadas por elementos externos al profesional de la auditoría, existe una mayor regulación y legislación. Además, siendo un tema en el que la comunicación y transferencia de información a nivel internacional es absolutamente vital, existen una serie de normas comunitarias que lo regulan. Sin embargo, existen ciertas limitaciones para el trabajo del auditor, generalmente relacionadas con la falta de acceso a la información, y la nula potestad que tiene este para reclamar esta información. Generalmente, ese tipo de situaciones, suelen estar relacionadas con el fraude y con el blanqueo de capitales.

Hemos analizado como la ausencia de cierta documentación de carácter relevante para la realización de la auditoría, puede provocar que este no pueda llevar a cabo su trabajo. Además, esta situación de ausencia de documentación y dificultad para disponer de ella, suele darse en situaciones en las que los administradores están intentando ocultar blanqueo de capitales.

De esta forma existen una serie de mecanismos, que podrían aplicarse, para tratar de evitar este tipo de situaciones.

En primer lugar, la Ley 10/2010 debería de dotar de una mayor potestad a los auditores de cuentas. Tal y como hemos analizado a lo largo del trabajo, el trabajo de los auditores, tiene una gran relevancia a nivel social y económico. La revisión, y aprobación de las cuentas de ciertas entidades de carácter estratégico en el país, es de vital importancia no solo para el correcto funcionamiento de la economía, sino también para la sociedad en general. Hemos podido ver, como el Caso Bankia, que tuvo una gran repercusión mediática, tuvo una gran influencia en la percepción que la sociedad tenía de

⁴⁸ Véase **Situación de la auditoría en España 2018**, pág. 2.

las entidades financieras, y de las actuaciones poco éticas de estas en la última crisis financiera. No solo eso, sino que las repercusiones económicas derivadas de esta situación tuvieron importante efecto en la economía del país, ya que, la reestructuración financiera que sufrió esta entidad (y alguna otras más) se financió con el erario público.

Por lo tanto, es de vital importancia, que los auditores de cuentas tengan una mayor potestad. En la Ley 10/2010 (artículo 2), se establece que los auditores serán sujetos obligados, lo que provoca que estén sujetos a una serie de obligaciones. Sin embargo, considero que deberían de establecerse también una serie de derechos o poderes a la hora de realizar su actividad.

Para ser más preciso, cuando un auditor se dispone a realizar su trabajo, y se encuentra con limitaciones como las que hemos desarrollado, tendría que poder actuar con un mayor número de herramientas. Tal y como he expresado, ante una situación en la que un empresario no facilita la documentación que el auditor necesita para la determinación de su opinión, este tiene que buscar la evidencia de auditoría de forma alternativa. En caso de no poder obtener dicha evidencia, el auditor emitiría una opinión con salvedades, o directamente no la emitiría, por lo que su postura sería “pasiva”.

Siendo la auditoría de cuentas vital para el funcionamiento económico de un país, la adopción de una postura “pasiva” es inadmisibles. Considero, que la Ley 10/2010 debería de permitir a los auditores, poder profundizar más en sus indagaciones de las empresas. Como hemos visto, ante una situación en la que el auditor tenga indicios de la comisión de un delito, este debería de ponerlo en conocimiento de las autoridades, para su pertinente investigación. Sin embargo, se produce una contradicción, y es que obtener dichos indicios sin la información suficiente en muchas ocasiones es totalmente imposible.

Por lo tanto, si se establecen una serie de obligaciones a los auditores, sin embargo, no se les dota de una serie de derechos o poderes, limitamos enormemente su actuación, no solo en materia de blanqueo de capitales, si no en cualquier ámbito en general.

La mejor forma de exponer esta propuesta, es mediante un ejemplo. Supongamos, que una firma de auditoría se dispone a auditar las cuentas anuales de una empresa. Si durante la realización de su tarea, el equipo de auditores se encontrase con una limitación al alcance. En caso de ser una limitación impuesta, debido a la falta de colaboración de la empresa, el auditor debería tener potestad para exigir la información de manera vinculante.

Es decir, en el caso en el que el auditor, tuviese sospechas infundadas de que la entidad auditada le estaría negando u ocultando información de manera intencionada, este debería de poder exigir esta información, y no solo solicitarla. Para esto, podría hacerse de igual manera que se realiza en el ámbito policial. Debería de existir un organismo, podría ser el ICAC, que emitiese ordenes de registro directamente a los auditores.

De esta manera, eliminaríamos cargas burocráticas, ya que, en caso de tener indicios de algún tipo de fraude, el auditor podría solicitar la orden al ICAC, y procedería según su criterio para la detección más temprana de cualquier tipo de fraude.

Actualmente, este procedimiento es mucho más extenso y complejo. El auditor, debería de notificar la posible existencia de algún tipo de fraude a la UIF, quien iniciaría el procedimiento de investigación, dilatando este proceso, y facilitando en cualquier caso la eliminación de pruebas de delito.

Sin embargo, las limitaciones para la obtención de información, no siempre provienen de la propia entidad. Tal y como hemos visto, en muchas ocasiones, son las terceras partes involucradas quienes deniegan o dificultan el acceso a documentación o información relevante para el trabajo del auditor.

Tal y como hemos desarrollado con anterioridad, existe la posibilidad de que las confirmaciones de los auditores no sean respondidas, o que los resultados de las respuestas no sean satisfactorios. En el segundo caso, generalmente suelen estar relacionados con algún tipo de fraude y, por lo tanto, se pondría en marcha el procedimiento habitual (notificación a las autoridades).

Sin embargo, en muchas ocasiones, las limitaciones impuestas anteriormente mencionadas, hacen referencia a situaciones en las que un auditor solicita confirmación a un tercero y no obtiene respuesta. Al igual que en la situación anterior, el auditor se encuentra con la misma contradicción. Por un lado, la ausencia de información puede estar detrás de un delito de blanqueo, o de cualquier otro tipo de fraude. Sin embargo, una vez más, la falta de información y de documentación no permite a un auditor resolver si existen indicios reales de fraude no.

Ante esta situación, una vez más, propongo que la Ley 10/2010 establezca una serie de obligaciones a todas las entidades para la colaboración con los auditores en este tipo de situaciones. Según la Ley, las entidades financieras (son las que reciben gran parte de las solicitudes de confirmación) son sujetos obligados, no obstante, no existe ninguna mención expresa en la Ley 10/2010 respecto a sus obligaciones en relación a las solicitudes de confirmación. Además, incluso una persona física podría recibir una solicitud de confirmación. Actualmente, no existe ningún tipo de mención sobre las circularizaciones en la Ley 10/2010, y considero que esto debería modificarse con premura. Por lo tanto, se debería establecer la obligación de respuesta ante las solicitudes de confirmación.

Por eso, sería recomendable establecer una serie de sanciones, que variarían en función de la gravedad, para establecer la obligatoriedad de responder a confirmaciones, y solicitudes de información y/o documentación por parte de los auditores. Por un lado, se crea un sistema de “presión” sobre terceros que a quienes soliciten información, obligándoles a hacer frente a la sanción en caso de no responder a los requerimientos de información. Por otro lado, se establece un sistema de alarma. En caso de producirse acumulación de sanciones, las autoridades actuarían en consecuencia, iniciando las investigaciones pertinentes.

Una vez analizada la situación a nivel nacional, es importante poner el foco en la normativa comunitaria, que es la que directamente tiene efecto en la nacional. Si bien es cierto que las limitaciones de la Ley 10/2010 terminan el territorio nacional, la lucha contra el blanqueo de capitales involucra a todos los estados, y los tratados, acuerdos, y

normas de carácter internacional son vitales, y tienen un efecto directo sobre las normativas de los países miembro.

Pese a que no tengo la intención de entrar directamente a denunciar la existencia o no de paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, resulta evidente que cada país o territorio dispone de diferentes normativas relativas a la fiscalidad. Tal y como establecen los artículos 63 y 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cada territorio tiene reserva de soberanía fiscal. Por lo tanto, cada territorio es libre de establecer sus propios tributos.

Sin embargo, el establecimiento de distintos criterios de imposición de cada territorio, crea ventajas competitivas dentro de la propia Unión Europea, o visto desde otro punto de vista crea desventajas entre los diferentes países miembro. Como hemos visto al inicio del trabajo, mediante técnicas conocidas como “*sándwich holandés*”, los Países Bajos incentivan el establecimiento de grandes empresas en su territorio mediante una carga fiscal baja. Si bien entra dentro de la legalidad, este tipo de políticas son consideradas por muchos como desleales o poco éticas. Ciertamente, si bien todos y cada uno de los territorios de la Unión Europea pueden establecer políticas similares, con el fin de incentivar el establecimiento de grandes corporaciones en su territorio, esta “lucha de precios a la baja” no haría más que perjudicar a la recaudación de los estados miembro. Por razones como esta, urge el establecimiento de una serie de normas comunes en materia fiscal y de blanqueo.

Si ponemos el foco en el Caso Jyske, mencionado anteriormente, resulta evidente que cada territorio tiene una serie de normas y políticas respecto al fraude fiscal y el blanqueo de capitales. En este caso, la entidad ciñéndose a la normativa vigente en su territorio, no estaba cometiendo delito, ya que, en Gibraltar el secreto bancario tiene unas normas distintas de las españolas. De hecho, es probable, que la razón de que una entidad bancaria danesa, quisiera establecerse en Gibraltar.

Ambos ejemplos, sirven para subrayar las grandes diferencias que existen dentro de la comunidad europea. Cada territorio, establece sus propias Leyes y sus propios tributos. Sin embargo, esta libertad normativa, en ciertos ámbitos puede afectar de forma negativa al resto de países miembro.

Resulta evidente que debido a la inexistencia de “fronteras reales” dentro de la Unión Europea la lucha contra el fraude fiscal, y el blanqueo de capitales es un problema que atañe a todos los países miembro. Por esta razón, y pese a que el debido a que cada territorio tiene una situación socio-económica diferente, ciertos criterios relativos a la carga tributaria deberían de homogeneizarse.

Es evidente, que cada país debe de tener la potestad para establecer sus propios tributos, ya que, si no, sería un atentado a la soberanía fiscal de cada país. Sin embargo, para evitar que un territorio obtuviese ventaja respecto a otro, aplicando cargas fiscales más bajas, sería necesario un acuerdo de honestidad entre todos los países, de cara al buen funcionamiento de la Unión entera.

Otra de las soluciones a esta situación, y que implicaría una gran integración entre los países miembro, sería la siguiente. Para todas aquellas situaciones, en las que una empresa con sede fiscal de fuera de la Unión Europea quisiera establecerse dentro de un

país miembro, se le establecería una carga fiscal estándar, acordada entre todos los miembros. Posteriormente, esta recaudación podría repartirse mediante alguna clave de reparto, de forma que resultase indiferente en que país miembro quiera establecerse cualquier compañía del extranjero. De esta forma, no se vulneraría la autonomía fiscal de ningún país.

Ciertamente, resulta una propuesta utópica, ya que, en la actualidad la Unión Europea carece de tales niveles de integración, y la adopción de grandes acuerdos de este nivel resultan de una gran dificultad.

Y es que, realmente lo que más puede afectar a un auditor a la hora de realizar su trabajo, es el secreto bancario. Por ejemplo, a la hora de rastrear el origen de un activo, o una transacción sospechosa, el auditor se encuentra con un muro en muchas ocasiones, debido al secreto bancario. Pese a que actualmente, el secreto bancario está erradicado dentro de los límites de la Unión Europea, numerosos países a lo largo del mundo siguen manteniéndolo. El secreto bancario en general supone una traba para los intereses de los auditores, un acuerdo de carácter global y nivel internacional en este aspecto es absolutamente imposible.

El ámbito influencia del Estado Español en este aspecto se limita a la Unión Europea. En lo que respecta a tratados internacionales, la capacidad a nivel nacional para poder negociar y exigir a terceros países es muy limitada. Ya hemos explicado, como existe una “lista negra” de países, a los que la Unión Europea considera paraísos fiscales.

Una de las principales medidas que tendría que tomarse a nivel comunitario, sería la de la prohibición de transacciones de empresas con sede dentro de la Unión Europea, con países relacionados con paraísos fiscales. Pese a que pueda sonar muy radical, y de difícil aplicación, podría realizarse de un modo paulatino. Podría comenzar, por ejemplo, mediante un periodo de prueba en el que no existiesen sanciones, pero si se dificultase el acceso a ayudas comunitarias a empresas que tuvieran relación con paraísos fiscales.

Un claro ejemplo en la adopción de medidas orientadas a la desincentivación de los paraísos fiscales, ha sido el de países como Francia, Dinamarca y Polonia. Debido a la grave crisis sanitaria que asola el mundo, y que está provocando una crisis económica sin precedentes, la mayoría de países de la Unión Europea están adoptando medidas para proteger sus economías. En este caso, los países arriba mencionados, han anunciado que no ofrecerán ayudas económicas a las compañías registradas en paraísos fiscales.

Si bien, este tipo de medidas, pueden no resultar excesivamente contundentes para luchar contra los paraísos fiscales, ayudan a crear una cultura colectiva de concienciación sobre la importancia de erradicar los paraísos fiscales. Ciertamente, la postura comunitaria en lo que respecta a este asunto, no ha sido lo suficientemente contundente que se espera de una entidad de la importancia de la Unión Europea.

Por lo tanto, es de vital importancia la desaparición del secreto bancario. Esto, facilitaría enormemente la transferencia de información entre distintos países, agilizando la detección de dinero de origen ilegal y, por ende, facilitando la tarea de auditores y autoridades en material fiscal. Actualmente, la OCDE, estima que alrededor de 32 billones de dólares descansan en paraísos fiscales de todo el mundo. De manera

aproximada, este montante sería equivalente a la suma de los PIB de Estados Unidos de América y la República Popular de China.

En relación a la colaboración internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, y más concretamente a nivel comunitario, además de la homogeneización fiscal existen otra serie de propuestas que facilitarían el trabajo tanto de auditores como de autoridades.

En primer lugar, actualmente, existe una gran cantidad de procedimientos burocráticos que hay que seguir, en caso de detectar indicios de un posible fraude. De esta forma, cualquier procedimiento de investigación se dilata de una forma alarmante. Además, si la tercera parte confirmante deniega la información (una vez más, podemos ver un ejemplo en el Caso Jyske), el procedimiento de denuncia ante las autoridades competentes en esta materia (TJUE en este caso), puede alargar la investigación durante varios años. Esto, beneficia en mayor medida a los delincuentes, ya que, les permite poder eliminar pruebas o disfrutar de ese “dinero negro”.

Por esta razón, debería agilizarse el procedimiento de denuncia y reclamación de información. Es decir, la creación de un comité de expertos, a nivel comunitario, y con capacidad de tomar decisiones de una manera ágil y vinculante. El objetivo principal de este comité, sería el de dirimir rápidamente los conflictos que pudiera surgir entre diferentes territorios o entidades. Trataría de tomar decisiones, en los casos en los que las normativas de los diferentes países miembros entraran en conflicto, como podía ser en el Caso Jyske, entre la jurisdicción española y la gibraltareña. Con esto, no solo se lograría acortar los plazos, en caso de surgir este tipo de conflictos, si no que la tendencia a nivel comunitario sería la de la homogeneización de las normativas propias.

La emisión de dictámenes con carácter vinculante, provocaría la creación de jurisprudencia, de forma que las normativas nacionales, tenderían a igualarse en este tipo de materias.

Si bien es cierto, que la mayoría de propuestas y soluciones, superan el ámbito de la Ley 10/2010, también es cierto, que la promoción de le Leyes y normas que vayan encaminadas a homogeneizar los criterios y normativas relativas al blanqueo de capitales, debe empezar desde los escalones más bajos. Por ello, es vital que la Ley 10/2010, refuerce las medidas de prevención del blanqueo de capitales, y la aplicación de algunas de las medidas aquí propuestas pueden ser una buena forma de empezar.

CONCLUSIONES

La lucha contra el lavado de activos, generalmente procedentes de la delincuencia, es uno de los mayores desafíos a los que tienen que hacer frente las autoridades. En pleno siglo XXI, y debido a la economía globalizada que impera en el mundo, el movimiento de capitales es constante a lo largo y ancho del planeta. Una gran parte de esos capitales, tiene su origen en el crimen organizado. Pese a la gran dificultad que provoca el rastreo y detección de este tipo de activos, es de vital importancia para el correcto funcionamiento del orden mundial. El mayor objetivo de la detección del “dinero negro”, no es más que conseguir que aquellos delincuentes que viven fuera de la ley, no puedan disfrutar de las ganancias de sus actos ilícitos, y puedan pagar por ello. La lucha contra este mal, empieza desde los peldaños más bajos, desde el trabajo de campo de los auditores, entre otras figuras, mediante la detección de pequeñas transacciones que poco a poco nos llevan a destapar grandes fraudes.

Una vez analizadas las limitaciones que un auditor tiene para la realización de su trabajo en relación a la Ley 10/2010, estas son las conclusiones que me vienen a la cabeza:

1. Desprotección. En relación a la probabilidad de existencia de errores debido al tratamiento y procesamiento masivo de información, resulta evidente la desprotección ante la que se encuentran los auditores por varias razones.

Los auditores juegan con una gran desventaja, ya que, mientras aquellos que están inmersos en la delincuencia financiera tienen una disponibilidad prácticamente ilimitada de recursos, los auditores se encuentran con una gran cantidad de trabas en su trabajo.

Además, es realmente preocupante y totalmente injusto, que un auditor pueda ser sancionado por negligencia en casos derivados de ocultación de fraude por parte de la empresa. La desprotección a la que hago mención, queda de manifiesto con hechos de este tipo.

Por lo tanto, es evidente que el auditor queda desprotegido no solo por no tener recursos suficientes para hacer su trabajo, sino que además por la amenaza de la sanción en caso de no detectar aquello que los delincuentes tratan de ocultar.

A lo largo del trabajo, he subrayado numerosas veces la importancia y la responsabilidad que reviste la profesión de la auditoría. Resulta clave para el correcto funcionamiento de la economía de un país, pero también tiene un importante efecto social. Sin embargo, resulta muy contradictorio la ausencia de recursos que rodea su trabajo, y que dificulta su tarea.

2. Falta de independencia y grupos de presión. En relación a la independencia de las firmas de auditoría, que ofrecen servicios de tipo variado a las empresas, resulta preocupante la capacidad de decisión que pueden llegar a tener estas a la hora de legislar en el ámbito de la auditoría.

En España, las *Big Four* generan aproximadamente el 70% de la facturación generada por las firmas de auditoría. Esto provoca una situación de acumulación de poder en estas cuatro firmas. De esta forma, resulta casi imposible legislar en

cualquier aspecto que pueda afectar a sus intereses. No deja de ser una paradoja, de que la tarea de fiscalizar las cuentas de las empresas de carácter estratégico en España, se reparta entre 4 grandes firmas de auditoría. Y que el devenir del Estado se fundamente en el buen funcionamiento de estas empresas. Y que, además, los salarios de estas firmas los abonen las empresas auditadas. Este círculo, puede resultar tentador para ejercer presión sobre las autoridades legislativas. Por esta razón, la capacidad de presión, o la acumulación de poder, de estas firmas de auditoría es alarmante, y debe de ponerse una solución.

3. Limitación territorial de la Ley 10/2010. Una vez analizadas las limitaciones que tiene un auditor en la realización de su trabajo, ha quedado claro que en muchas ocasiones la obtención de información de entidades extranjeras resulta extremadamente complicado. De esta forma, se ha evidenciado la falta de capacidad de la legislación nacional en este tipo de materias, y la dependencia que tiene de la normativa comunitaria.

El blanqueo de capitales, es un delito que se produce tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, es evidente que la Ley 10/2010 puede combatir este delito, siempre y cuando se cometa dentro de sus fronteras, y con entidades nacionales.

Sin embargo, ha quedado meridianamente claro, que para los casos en los que se necesita de una interacción con entidades de fuera de España, la Ley 10/2010 queda totalmente limitada. Su dependencia para con la normativa europea es absoluta. Por un lado, y para conflictos con otros países miembro, deberá basarse en lo establecido en la normativa europea. Por otro lado, y en caso de las relaciones con entidades de países ajenos a la Unión Europea, serán los acuerdos y tratados internacionales firmados por esta quienes establecerán las normas de actuación.

4. Integración comunitaria. En relación con la anterior conclusión, resulta más que evidente, que la lucha contra el blanqueo de capitales, a nivel internacional depende de una mayor integración y coordinación por parte de la Unión Europea. El poder de decisión de cada estado miembro, y la capacidad de influencia de manera individual es muy limitada.

Debido a ello, es absolutamente necesario una mayor integración para la lucha contra el blanqueo de capitales dentro de la Unión Europea. El establecimiento de criterios más homogéneos en materia fiscal, de forma que no existan diferencias tributarias en los diferentes estados miembro. Una forma de actuar unificada, que prohíba las relaciones comerciales de todo tipo con empresas establecidas en paraísos fiscales.

Bibliografía

- Álvarez Pastor, D., & Eguidazu Palacios, F. (2006). *MANUAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Arens, A. A., & Loebbecke, J. K. (1996). *AUDITORÍA. UN ENFOQUE INTEGRAL*.
- Bajo Fernández, M., & Díaz-Maroto y Villarejo, J. (). *LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS AUDITORES*.
- Blanco Cordero, I. (Diciembre de 2001). LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS DE LA UE. *EGUZKILORE*(15), 7-38.
- Díaz , V. F., García Moncó, García Moncó, A., Hierro Anibarro, S., Viñuelas Sanz, M., Zabaleta Díaz, M., & Arenas Ramiro, M. (2017). *MATERIAS JURÍDICAS*. MADRID.
- Flores Martín, A. R., & González Botija, F. (2016). *LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO TRAS LA ADHESIÓN DE ESPAÑA A LA UE*. MADRID.
- ICAC. (2019). *SITUACIÓN DE LA AUDITORÍA EN ESPAÑA 2018*. Madrid.
- ICJCE. (2008). *CODIGO DE ETICA PROFESIONAL*.
- ICJCE. (2018). *EL PAPEL DEL AUDITOR EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA FINANCIERA*.
- JYSKE BANK GIBRALTAR LTD., C-212/11 (Tribunal Justicia de la Unión Europea 25 de abril de 2013).
- Mir Fernández, C. (2018). *MANUAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO*. En C. Mir Fernández.
- Oficina Europea de contra el fraude (OLAF). (). *EL PAPEL DE LOS AUDITORES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE*.

ⁱ Actualmente cuenta con 33 miembros, 33 países y dos organizaciones internacionales además de más de 20 observadores. Se puede encontrar una lista de los miembros en la web del GAFI:
http://www.fatf.gafi/members_en.htm